



Trabajo Fin de Grado

ACAPARAMIENTO DE TIERRAS (LAND GRABBING): PERSPECTIVA GENERAL Y PROBLEMAS SUSCITADOS AL RESPECTO POR LAS EMPRESAS MULTINACIONALES ESPAÑOLAS

Presentado por:

Ana María Monzonís Hinarejos

Tutor/a:

Francisco Javier Zamora Cabot

Grado en Derecho

Curso académico 2014/15

LISTA DE ABREVIATURAS

Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico de El Quimbo	ASOQUIMBO
Banco Interamericano de Desarrollo	BID
Banco Mundial	BM
Comité de Seguridad Alimentaria Mundial	CSA
FoodFirst Information and Action Network	FIAN
Obligaciones Extraterritoriales de los Estados	ETO
Observatorio de Multinacionales en América Latina	OMAL
Organización de las Naciones Unidas	ONU
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura	FAO
Organización Internacional del Trabajo	OIT
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México	RNDDHM
Responsabilidad Social Corporativa	RSC
Servicio de Evaluación Ambiental	SEA
Unión Europea	UE

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN.....	1
II. EL ACAPARAMIENTO DE TIERRAS	4
1. DEFINICIÓN	4
2. CAUSAS	7
III. RELACIÓN CON LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y LAS INVERSIONES.....	10
IV. LOS CASOS DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS	16
1. EL CASO DE EBRO FOODS Y MARRUECOS	17
2. EL CASO DE IBERDROLA Y OAXACA	21
3. EL CASO DE ENDESA, CHILE Y COLOMBIA.....	27
V. REFLEXIONES FINALES.....	33
VI. CONCLUSIONES.....	338
VII. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA	40
VIII. LAND GRABBING, SPANISH COMPANIES AND HUMAN RIGHTS.....	45

I. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo consiste en un acercamiento al fenómeno conocido como acaparamiento de tierras o land grabbing, mediante la exposición de tres casos actuales en los que están interviniendo empresas españolas. El objetivo principal del mismo es reflejar una pequeña parte de la realidad sobre un fenómeno que parece estar aumentando de manera considerable en los últimos años y que, como consecuencia, ha abierto un debate sobre la necesidad de regular de una manera realmente efectiva los procesos de inversiones con el fin de evitar las repercusiones negativas hacia los afectados y en definitiva, las vulneraciones hacia los derechos humanos, en un contexto actual donde se evidencia la escasez de recursos, el proceso de globalización y el cambio climático. Ha sido, principalmente, un trabajo de investigación sobre casos concretos de inversiones en los que se han producido claras vulneraciones en los derechos de las comunidades de los territorios afectados. Se ha intentado asimismo relacionarlos con el entramado jurídico actual, tanto nacional como internacional, así como con los movimientos sociales nacidos como contrarresto.

Para la realización del trabajo ha sido fundamental la normativa internacional, muy en especial la elaborada en el seno de las Naciones Unidas, así como otros instrumentos no vinculantes. También han sido muy relevantes los artículos y ensayos elaborados por expertos en la materia, en especial por el antiguo Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Olivier de Schutter. En cuanto a la investigación realizada en los tres casos expuestos, ha sido indispensable la información recabada de numerosas organizaciones y asociaciones, entrevistas, libros y artículos de periodistas, investigadores y profesores universitarios. Cabe decir que no ha sido posible recabar todos los puntos de vista posibles en gran medida por el silencio que rodea al inversor en estos casos.

En primer lugar, el trabajo presenta una breve explicación del concepto y características del acaparamiento de tierras, y sus principales causas. Este fenómeno se entiende como la adquisición o arrendamiento a largo plazo de tierras con el objeto principal de producir y exportar alimentos y combustibles (aunque también para otros fines como el de obra pública o el turístico). El acaparamiento de tierras se caracteriza por acuerdos poco transparentes realizados sobre tierras que se presentan como vacías o no productivas, pero que en la realidad están ocupadas por poblaciones locales cuya vida y subsistencia depende del mismo. Estas comunidades suelen carecer de títulos de propiedad de las tierras que habitan, lo cual es aprovechado por

el actor inversor para adquirirlas o arrendarlas, obligando a la población a abandonar su territorio, en algunas ocasiones mediante el desalojo forzoso y el empleo de la fuerza. El proceso provoca la vulneración de derechos humanos, en especial los que garantizan el derecho a la tierra. Las causas principales de este fenómeno se basan en la inseguridad alimentaria, en la volatilidad de los precios y en la seguridad energética, todo ellos a consecuencia de la escasez de recursos, el cambio climático y el aumento de población. En menor medida, los fines de protección medioambiental, la creación de zonas económicas especiales para poner en valor zonas sin producción, la creación de nuevos instrumentos financieros para la obtención de beneficios vinculados con la creciente preocupación por el abastecimiento alimentario y el conjunto de normas, reglamentos e incentivos previstos por la comunidad internacional para facilitar este fenómeno también han propiciado el acaparamiento de tierras.

En segundo lugar, el trabajo trata de exponer una relación entre las inversiones y el desarrollo de los países anfitriones. Para ello se presentan tres corrientes con puntos de vista diferentes sobre el modo de llevar a cabo una inversión. Cada una de ellas viene defendida por un grupo de actores, estos son, inversores, organizaciones internacionales y determinadas organizaciones y movimientos sociales. Estas corrientes dan lugar a dos tipos de inversiones: las negativas y las positivas. Ambas se encuentran íntimamente relacionadas con el desarrollo de las comunidades afectadas por las inversiones, en la medida que la primera (la negativa) da lugar a graves perjuicios en el desarrollo económico, social, cultural y medioambiental de la población, y la segunda (la positiva) causa un impulso en los sectores mencionados, disminuyendo a largo plazo la pobreza. El marco regulatorio internacional actual refleja su compromiso sobre la segunda de las posiciones.

Una vez establecidos las ideas básicas sobre el acaparamiento de tierras, el trabajo se centra en tres casos actuales en los que se produce este fenómeno, y en los que los sujetos inversores han sido empresas españolas de los sectores alimenticios y energéticos. El primero de ellos se desarrolla en Marruecos, más concretamente en la localidad de Chlihate, en donde la compañía española principalmente arrocera Ebro Foods estableció hace unos años una de sus plantaciones. El conflicto ha surgido como consecuencia de la ampliación en 2012 de la zona de plantación a las tierras de cultivo que empleaba la población para su consumo y supervivencia. La consecuencia inmediata ha sido hambre, pobreza y problemas debidos a los fertilizantes y a los mosquitos atraídos por la plantación. Todo ello ha generado protestas y alzamientos en la población, reprimidos según sus habitantes de manera dura y contundente. El

conflicto generó diversos informes por parte de organizaciones como Veterinarios Sin Fronteras o Intermón Oxfam. Este último informe fue contestado por la compañía española.

El segundo caso se desarrolla en Oaxaca, México, y la empresa española inversora es en este caso Iberdrola. La compañía energética ha construido numerosos parques eólicos en todo el territorio de Oaxaca, proyectos que han estado rodeados de denuncias entre las poblaciones locales por supuestos engaños y presiones para hacer firmar los contratos de venta o arrendamiento de las tierras. Las repercusiones de la construcción de los parques eólicos han sido negativas tanto en el plano laboral, como en el económico y en el social. Como consecuencia, se han producido levantamientos sociales que han sido reprimidos duramente según los testimonios encontrados. Las denuncias de distintas asociaciones se han repetido durante los últimos años, sin embargo, los proyectos de construcción de parques eólicos en la zona siguen en curso.

El tercer y último caso hace referencia a la empresa Endesa, ahora prácticamente italiana, pero que por su importancia he creído conveniente introducirla en el presente trabajo. El territorio objeto de las inversiones son, en este caso, Chile y Colombia, en donde la empresa ha instalado varias centrales hidroeléctricas que han suscitado la oposición de la población local afectada así como de numerosas organizaciones sociales, por las supuestas vulneraciones hacia los derechos humanos durante el proceso de construcción. Así, diversas organizaciones han denunciado cooptación de líderes, sobornos y hostigamientos, y sus habitantes han hablado de presiones y amenazas de expropiación en la firma de los contratos. Asimismo, se ha producido el desplazamiento forzoso de miles de personas cuyas poblaciones han sido inundadas por los proyectos hidroeléctricos. También las consultas elaboradas han sido objeto de cuestionamiento y en ocasiones de proceso judicial.

La última parte del trabajo elabora unas sucintas reflexiones finales en las cuales se hace referencia a la importancia de la tierra para las comunidades locales y especial la indígena, e intenta reflejar los principales derechos que se vulneran mediante el acaparamiento de tierras. Por último, se pronuncia sobre la necesidad de una regulación más efectiva y vinculante, y de un mayor compromiso por parte de las empresas inversoras de respetar los derechos humanos y por parte de los Estados de responsabilizarse de sus actuaciones y las de sus empresas fuera de su territorio.

II. EL ACAPARAMIENTO DE TIERRAS

1. DEFINICIÓN

De entre los problemas contemporáneos a nivel global que se conocen -hambre, pobreza, deforestación o cambio climático, entre otros ejemplos- se encuentra uno que, a primera vista, parece quedarse a un lado, eclipsado por los demás. Sin embargo, su importancia es indiscutible dado que, en gran parte, es una de las causas de la existencia de estos problemas. Se trata del acaparamiento de tierras, conocido internacionalmente como "land grabbing". Un fenómeno que ha quedado oculto durante mucho tiempo, pero que en los últimos años se ha convertido en un suceso bien establecido y cada vez más conocido como consecuencia de sus importantes afectaciones negativas hacia la tierra y, de una manera fundamental, hacia los derechos humanos.

El acaparamiento de tierras es un fenómeno antiguo. De hecho, presenta antecedentes ya en la era del colonialismo y del imperialismo¹. En aquella época, los sujetos acaparadores eran Estados y su objetivo fundamental era conquistar la tierra. Hoy en día, esta perspectiva ha derivado -aunque no lo ha hecho su esencia- en la medida en que son principalmente las multinacionales y los grupos industriales y financieros privados los que actúan como sujetos acaparadores, y su objetivo, más que dominar los países, es conquistar el mercado; no acaparar tierras, sino sus riquezas².

Numerosos autores expertos en la materia han definido este fenómeno. Así, Olivier De Schutter lo conceptúa como *"la adquisición o el arrendamiento a largo plazo de grandes áreas de tierra por inversores"*³. Saturnino M. Borrás Jr y Jennifer C. Franco, como *"la explosión actual de transacciones comerciales de tierras que se involucran principalmente en torno a la producción y exportación de alimentos, piensos, biocombustibles, madera y minerales"*⁴. Se trata, en conclusión, del proceso por el cual se compra o arrienda grandes porciones de tierras para la producción, principalmente, en los sectores agroalimentario y extractivo, pero también en los sectores de obra pública

¹ MARGULIS, M., MCKEON, N. y BORRÁS, S., «Land Grabbing and Global Governance: Critical Perspectives», *Globalizations* núm. 10, 2013, pp. 1-23, p.3.

² BOIX, V., *Piratas y pateras: el acaparamiento de tierras en África*, Icaria Editorial, S.A., Barcelona, 2012, p.11.

³ DE SCHUTTER, O., «How not to think of land-grabbing: three critiques of large-scale investments in farmland», *The Journal of Peasant Studies* núm. 38, 2011, pp. 249-279, p. 249.

⁴ BORRÁS, S. y FRANCO, J., «Global land grabbing and trajectories of agrarian change: a preliminary analysis», *Journal of Agrarian Change* núm. 12, 2012, pp.34-59, p. 34.

e incluso en el turístico. La mayoría de estas transacciones se realizan entre fondos de inversión privados (a menudo vinculados a gobiernos extranjeros) y gobiernos nacionales (que controlan y poseen la tierra en un sentido formal)⁵.

El acaparamiento de tierras es un fenómeno global que, sobre todo a raíz de la crisis alimentaria de los años 2007 y 2008, ha cobrado una gran importancia por el alarmante incremento del ritmo en que se está produciendo y por el incremento de la extensión de tierra que se está acaparando. Se estima que *"los acuerdos sobre las tierras han alcanzado los 20 millones de hectáreas entre 2005 y 2009, según el International Food Policy Research Institute (IFPRI, 2009); 45 millones de hectáreas desde 2007-2008 de acuerdo con el Banco Mundial) (2010); y 227 millones de hectáreas desde el 2000"*⁶, según la organización no gubernamental de cooperación para el desarrollo Intermón Oxfam (2011). Aunque en realidad se desconoce la cantidad exacta de tierras acaparadas, por tres razones. En primer lugar, porque estos proyectos pueden encontrarse en diferentes niveles de desarrollo en cuanto a su planificación y puesta en marcha. En segundo lugar, porque la financiación puede cambiar de manera abrupta. Y en tercer lugar, por la existencia de baja fiabilidad y corrupción en la recogida de datos debido tanto a factores técnicos como políticos⁷.

La principal característica que presenta el acaparamiento de tierras es que se realiza en tierras que se presentan como "vacías", "marginales", "ociosas" o "degradadas"⁸. De hecho, el Banco Mundial (en adelante BM) ha declarado la existencia de una reserva mundial de tierra "disponible" de entre 445 millones y 1.700 millones de hectáreas⁹. Sin embargo, la realidad es que estas compras y arrendamientos a largo plazo se realizan en tierras que no están vacías, sino en las que en la mayoría de ocasiones están ocupadas por pueblos y comunidades de campesinos y de pequeños agricultores.

Estas poblaciones se ven desplazadas de manera forzosa de las tierras que habitan como consecuencia de las compras y arrendamientos. Desplazamientos que, como en

⁵ FLEURKE, F., (2014), *A brief Introduction to the Phenomenon of Land Grabbing*, recuperado de <http://www.nvvn.nl/artikel/a-brief-introduction-to-the-phenomenon-of-land-grabbing/>

⁶ FUHEM ECOSOCIAL, Informe *El acaparamiento global de tierras. Guía básica*, Programa de Justicia Agraria de TNI, Madrid, 2013, p. 12.

⁷ *Ibíd.*, p. 13.

⁸ *Ibíd.*, p. 3.

⁹ *Ibíd.*, p. 3.

el caso Mubende-Neumann¹⁰, se realizan mediante desalojos forzosos y violentos que ocasionan muerte, pobreza y hambre. En otras ocasiones las transacciones se producen en tierras donde la población campesina cultiva sus alimentos para subsistir, por lo que, al quedarse sin estas, muchos de ellos acaban convirtiéndose en trabajadores para la empresa inversora u optan por abandonar el territorio para buscar otro lugar donde poder sobrevivir.

Existen dos aspectos básicos que facilitan el acaparamiento de tierras. Por un lado, las transacciones realizadas entre los sujetos acaparadores y el país huésped suelen llevarse a cabo mediante tratos especulativos, oscuros y carentes de transparencia, así como de previa consulta a los afectados. Estos tratos también vienen facilitados por el nivel de corrupción de los gobiernos estatales y locales de los países huéspedes¹¹. Se advierte, por tanto, que en los países objeto de estas transacciones de tierras es característica la existencia de un problema de gobernanza, por lo que resulta muy difícil gestionar de manera eficaz estas inversiones con el fin de garantizar que contribuyan al desarrollo rural y la mitigación de la pobreza¹².

Por otro lado, supone una gran desventaja que las tierras objeto de las transacciones carecen de títulos de propiedad en la mayoría de las ocasiones. Ello es debido a que en gran parte de los países huéspedes la propiedad privada es inexistente como tal, siendo las tierras de carácter comunal (también denominadas no privadas). De esta manera, se niega el derecho consuetudinario de las poblaciones que han vivido durante generaciones en estos terrenos¹³. Los Estados y los gobiernos locales de los países huéspedes toleran, o incluso promueven, la situación de desprotección jurídica en la que se encuentra la población campesina frente a las transacciones.

En este sentido, es interesante exponer la situación o situaciones que establece Intermón Oxfam para que una adquisición de tierras se convierta en acaparamiento:

- *Violan los derechos humanos, en particular la igualdad de derechos de las mujeres.*
- *Conculcan el principio de consentimiento libre, previo e informado, en virtud del cual las comunidades afectadas reciben información sobre la transacción y tienen la posibilidad de dar o negar su consentimiento a la misma.*

¹⁰ ZAMORA, F.J., «Acaparamiento de tierras (land grabbing) y empresas multinacionales: el caso Mubende-Neumann», *Proyecto Consolider-Ingenio 2010, HURI-AGE, Papeles el tiempo de los derechos*, núm. 5, 2013, pp. 10-14.

¹¹ BORRÁS, S. y FRANCO, J., «Global land grabbing and trajectories...», cit., p. 38.

¹² DE SCHUTTER, O., «How not to think of land-grabbing...», cit., p. 249.

¹³ BOIX, V., *Piratas y pateras: el acaparamiento de tierras en África*, cit., p.27.

- *No se basan en, o ignoran, una evaluación exhaustiva de las repercusiones sociales, económicas y medioambientales de la inversión, entre ellas las cuestiones de género.*
- *Evitan los contratos transparentes que incluyan compromisos claros y vinculantes sobre empleo y distribución de beneficios.*
- *Eluden la planificación democrática, la supervisión independiente y la participación efectiva¹⁴.*

En definitiva, se puede afirmar que *"el acaparamiento de tierras se asocia a menudo con acuerdos con muy bajos niveles de transparencia, de consulta y de respeto a los derechos de las comunidades locales que viven de la tierra"*¹⁵.

2. CAUSAS

Como se ha indicado en el apartado anterior, el acaparamiento de tierras lleva produciéndose desde la época del colonialismo aunque, en los últimos años, este fenómeno ha aumentado de forma considerable debido a una serie de causas o factores.

En primer lugar, el incremento de compra de tierras se produce por la inseguridad alimentaria. La crisis mundial de 2008 acrecentó el temor de los gobiernos, principalmente de los países occidentales, de ser incapaces de satisfacer la totalidad de la demanda de alimentos de su población. Junto a ellos, las empresas multinacionales también vieron peligrar el abastecimiento de esta demanda. Como consecuencia, tras décadas de abandono, se produjo la renovación del interés por la tierra. De hecho, *"desde mediados de 2008 a 2009, las transacciones registradas de terrenos agrícolas realizadas por inversores extranjeros en los países en desarrollo se dispararon en un 200 por ciento aproximadamente"*¹⁶.

La volatilidad de los precios se configura como otra causa muy relacionada con la inseguridad alimentaria que ha propiciado la compra de tierras. Se entiende por volatilidad de precios *"la variación ascendente o descendente que registra un precio en*

¹⁴ GEARY, K., Nota informativa *Nuestra tierra, nuestras vidas*, Oxfam Internacional, 2012, p. 5.

¹⁵ MARGULIS, M., MCKEON, N. y BORRÁS, S., «Land Grabbing and Global Governance...», cit., p. 2.

¹⁶ GEARY, K., Nota informativa *Nuestra tierra, nuestras vidas*, cit., p. 2.

*un período determinado*¹⁷, variaciones que constituyen un componente esencial del funcionamiento normal de los mercados¹⁸. La necesidad de las personas de alimentarse es indispensable y, por lo tanto, el consumo es una variable inelástica. Sin embargo, lo que sí se considera desigual es *"la distribución de la elasticidad de los precios de los alimentos en el contexto mundial"*¹⁹. Aquellos que poseen más dinero se consideran más indiferentes a la volatilidad de los precios de los alimentos que aquellos que carecen de recursos financieros. En los países desarrollados la demanda de los productos alimenticios es casi siempre la misma independientemente de la subida o bajada de los precios.

Los precios de los alimentos y la volatilidad están vinculados a la cantidad de existencias mundiales de alimentos²⁰. A su vez, la demanda de alimentos crece de forma continua, incluso se ha acelerado en las décadas de 1990 y 2000, posiblemente por el crecimiento de la población mundial²¹. La subida de los precios de un producto es consecuencia de la escasez de dicho producto. Si a pesar de la volatilidad de los precios la demanda es invariable, la consecuencia directa es la escasez de alimentos que crea la inseguridad alimentaria antes mencionada. Lo mismo puede decirse con respecto a la demanda de combustibles, que crece de manera continua debido al aumento de la economía global.

En definitiva, estas dos primeras causas, relacionadas indirectamente con el cambio climático y con el rápido crecimiento de la población²², son las responsables principales de que las empresas privadas y los países occidentales hayan comprado grandes extensiones de tierra en aras de garantizar la seguridad alimentaria y la energética. Además, en los últimos años han emergido otros actores estatales como *"los países del BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), algunos países poderosos del MIC ("middle income countries", países de ingresos medios), los países de la OCDE (por ejemplo Corea del Sur) y los Países del Golfo"*²³.

Junto con la inseguridad alimentaria y la volatilidad de los precios existen otros factores implicados en la producción del acaparamiento de tierras:

¹⁷ GRUPO DE EXPERTOS DE ALTO NIVEL SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN, Informe *Volatilidad de los precios y seguridad alimentaria*, Informe HLPE Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, Roma, 2011, p. 24.

¹⁸ *Ibíd.*, p. 24.

¹⁹ *Ibíd.*, p. 24.

²⁰ *Ibíd.*, p. 30.

²¹ *Ibíd.*, p. 35.

²² FLEURKE, F., (2014), *A brief Introduction...*, cit., recuperado de <http://www.nvvn.nl/artikel/a-brief-introduction-to-the-phenomenon-of-land-grabbing/>

²³ BORRAS, S., FRANCO, J., y WANG, C., «Land & Sovereignty in the Americas. Governing the Global Land Grab: Competing political tendencies», *Food First* núm. 2, 2013, p. 4.

La seguridad energética se relaciona íntimamente con las nuevas formas de extracción de los recursos²⁴. El sector extractivo, de minerales, petróleo y gas, es el que desde hace ya largo tiempo produce las mayores afectaciones en los derechos humanos a escala mundial²⁵. La mayor parte de los países del mundo son incapaces de abastecer la totalidad de su demanda nacional con recursos propios y, como consecuencia, buscan nuevas formas de suministrar dicha energía mediante los llamados agrocombustibles y biocombustibles, que están considerados fuentes renovables. Así pues, según la asociación ecologista Amigos de la Tierra Europa, *"hasta un tercio de los acuerdos sobre tierras se realizan con el objetivo de cultivar estos recursos para abastecer los mercados extranjeros, sobre todo los de la Unión Europea y China"*²⁶. Es más, las políticas internacionales, y especialmente europeas, pretenden conseguir a largo plazo que un tanto por ciento de los combustibles futuros provengan de energías renovables. Así, en el caso de la Unión Europea (en adelante UE), el porcentaje fijado para el año 2010 era de un diez por ciento²⁷.

Otra causa arraigada en los últimos años es el acaparamiento de tierras con fines de protección del medio natural propiciado por los nuevos imperativos y herramientas medioambientales²⁸. Este tipo de acaparamiento es denominado "acaparamiento verde" que, según la fundación FUHEM Ecosocial, consiste en *"la apropiación de tierra y recursos para fines ambientales tales como las reservas naturales, el secuestro de carbono y los programas de intercambio"*²⁹. De esta manera, se ha propiciado la mercantilización de la naturaleza por un amplio grupo de actores y para una variedad de usos en nombre de la "sostenibilidad", la "conservación" o los valores "verdes"³⁰. Sin embargo, este tipo de acaparamientos produce efectos negativos sociales y ecológicos en los países objeto de dichas transacciones.

Los proyectos de compensación del carbono juegan un papel importante en el acaparamiento verde. Mediante estos planes, a las compañías y a los países se les permite reducir sus emisiones de carbono a través de reducciones teóricas en otro

²⁴ ZAMORA, F.J., «Acaparamiento de tierras...», cit., p. 6.

²⁵ ZAMORA, F.J., «Desarrollo sostenible y empresas multinacionales: un estudio sobre los acaparamientos de tierra (land grabbings) en clave de responsabilidad» *Proyecto Consolider-Ingenio 2010, HURI-AGE, Papeles el tiempo de los derechos*, núm. 4, 2015, p. 2.

²⁶ FRIENDS OF EARTH EUROPE, Informe *África, el acaparamiento de tierras: Un estudio sobre el alcance y el impacto de los acaparamientos de tierras para agrocombustibles*, 2010, p. 8.

²⁷ *Ibíd.*, p. 12.

²⁸ ZAMORA, F.J., «Acaparamiento de tierras...», cit., p. 6.

²⁹ FUHEM ECOSOCIAL, Informe *El acaparamiento global de tierras...*, cit., p. 15.

³⁰ *Ibíd.*, p. 15.

lugar³¹, por lo que las empresas y los países compran tierras para compensar su contaminación. Un ejemplo es el Proyecto de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REED+) del BM y de la Organización de las Naciones Unidas (en adelante ONU).

De entre las causas que producen el acaparamiento se encuentra también la creación de zonas económicas especiales para poner en valor zonas sin producción³². Estas apropiaciones de tierras tienen como objeto incentivar el crecimiento económico en países emergentes. Conlleva, como consecuencia, la expropiación de tierras para la construcción de complejos comerciales, industriales y residenciales en las áreas periurbanas, dando lugar a los conflictos de tierras³³.

Otro factor que acrecienta la compra de tierras es *"la creación de nuevos instrumentos financieros, con miras a reducir los riesgos del mercado y a que los grandes grupos de inversión obtengan beneficios vinculados con la creciente preocupación por el abastecimiento alimentario"*³⁴. Instrumentos financieros tales como exenciones, moratorias fiscales, condiciones económicas favorables o subvenciones de apoyo a la inversión³⁵.

Por último, se encuentra el conjunto de normas, reglamentos e incentivos previstos por la comunidad internacional que facilitan este fenómeno³⁶. Estas normas son realizadas y propiciadas por organizaciones multilaterales de la ONU, así como por bancos internacionales de desarrollo, que promueven un marco favorable para los acuerdos de tierras³⁷.

III. RELACIÓN CON LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y LAS INVERSIONES

Existen cinco tipos de fuentes de derecho aplicables a las inversiones extranjeras: la legislación nacional del Estado en el que se realiza la inversión; el derecho consuetudinario de las comunidades locales e indígenas; el derecho internacional; las normas de RSC y los códigos de conducta; y la legislación nacional del Estado de

³¹ CARBON TRADE WATCH, Hoja Informativa 2, *Compensaciones de carbono*, 2009, p. 1.

³² ZAMORA, F.J., «Acaparamiento de tierras...», cit., p. 6.

³³ DEL VISO, N., «Los nuevos amos de la tierra: acaparamiento de tierras y neoliberalismo», Fuhem Ecosocial, 2013, p. 7.

³⁴ ZAMORA, F.J., «Acaparamiento de tierras...», cit., p. 6.

³⁵ DEL VISO, N., «Los nuevos amos de la tierra...», cit., p. 4.

³⁶ ZAMORA, F.J., «Acaparamiento de tierras...», cit., p. 7.

³⁷ DEL VISO, N., «Los nuevos amos de la tierra...», cit., p. 7.

origen de la inversión³⁸. En la realidad, las legislaciones nacionales de los Estados y el derecho internacional poseen mucha más importancia que las normas de RSC, los códigos de conducta y el derecho consuetudinario de las comunidades locales e indígenas, y ello es debido a que las primeras son ejecutables ante los tribunales y las segundas son protegidas en menor medida, lo cual resulta en la práctica más difíciles de hacer cumplir. De esta manera, los intereses de los inversores poseen un mayor respaldo jurídico que los intereses de las poblaciones locales e indígenas³⁹.

Las empresas privadas, las fundaciones inversoras y los Estados (normalmente a través de empresas de su propiedad) son los actores principales del acaparamiento de tierras⁴⁰. Su número es muy reducido y todos ellos forman un oligopolio mediante el cual dirigen el sistema alimentario mundial, estableciendo sus propios intereses con el objetivo último de obtener altos beneficios. Así pues, invierten en los países en desarrollo imponiendo sus propios precios y condiciones en el mercado, controlando las cadenas de valor y determinando quién asume los riesgos de la producción. En consecuencia, maximizando sus beneficios y reduciendo los riesgos propios⁴¹.

Las inversiones que realizan las empresas privadas suelen llevarse a cabo en países en desarrollo principalmente de África, América del Sur (como se expondrá más adelante) y Asia (se encuentran casos en el sudeste asiático, entre muchos otros⁴²). Estas inversiones están *"íntimamente ligadas a las condiciones de vida de las comunidades rurales ya que utilizan los mismos recursos naturales y dependen del mismo ecosistema"*⁴³, y también están ligadas a su desarrollo, tanto económico como social. En este contexto, el acaparamiento de tierras en múltiples ocasiones resulta absolutamente contrario a los diversos objetivos que conforman el desarrollo sostenible⁴⁴. La realidad es que, en la gran mayoría de casos, las inversiones suelen ser beneficiosas únicamente para la parte que invierte y, en consecuencia, el vínculo entre estas inversiones y el desarrollo de las comunidades locales es inexistente. Es

³⁸ FLEURKE, F., (2014), *A brief Introduction...*, cit., recuperado de <http://www.nvvn.nl/artikel/a-brief-introduction-to-the-phenomenon-of-land-grabbing/>

³⁹ *Ibíd.*

⁴⁰ FRIENDS FOR THE EARTH EUROPE, Informe *África, el acaparamiento de tierras: Un estudio sobre...*, cit., p. 12.

⁴¹ SAN PEDRO, P., «La empresa española y los derechos humanos. Claves para una internacionalización responsable» núm. 34, *Interión OXFAM*, 2013, p. 9.

⁴² MARKS, D., SIRITHET, A., RAKYUTTITHAM, A., WULANDARI, S., CHOMCHAN, S., *Land Grabbing and Impacts to Small Scale Farmers in Southeast Asia Sub-Region*, Local Act Thailand, recuperado de http://www.iss.nl/fileadmin/ASSETS/iss/Research_and_projects/Research_networks/LDPI/C MCP_60-Samranjit.pdf

⁴³ SAN PEDRO, P., «La empresa española y los derechos humanos...», cit., p. 10.

⁴⁴ ZAMORA, F.J., «Desarrollo sostenible y empresas...», cit., p. 2.

más, se produce todo lo contrario, puesto que el país "huésped" de estas inversiones es el receptor de innumerables perjuicios económicos, sociales, medioambientales y alimentarios, mientras que las empresas inversoras obtienen todos los beneficios.

La manera de invertir que se produce en la mayoría de casos se puede definir como "negativa" por sus efectos hacia las comunidades locales y hacia el medio ambiente. Las empresas que realizan este tipo de inversiones consideran que la tierra y sus recursos naturales son un activo financiero más, y las explotan sin tener en cuenta el coste que tiene para las comunidades locales que habitan en esas tierras⁴⁵. Estas empresas privadas utilizan mano de obra barata, contraviniendo las normas laborales internacionales de trabajo establecidos por los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (en adelante OIT) y que recogen los Principios Rectores de Naciones Unidas⁴⁶. Sus inversiones se realizan de tal manera que agotan los recursos hídricos y del suelo⁴⁷, es decir, reducen el número de tierras fértiles y de agua potable indispensables para la vida de las comunidades rurales⁴⁸. También aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero⁴⁹ provocando "*patrones meteorológicos cada vez más cambiantes, aumentado la vulnerabilidad de los pequeños agricultores*"⁵⁰. Todo ello sin contar las vulneraciones de los derechos a la tierra y a la alimentación de las comunidades rurales de los países en desarrollo⁵¹, derechos cada vez más reconocidos por la comunidad internacional.

Este tipo de inversiones responden a la postura política y económica de quienes fomentan los acuerdos sobre tierras, alegando que favorecen el desarrollo y la modernización⁵². Habitualmente son las empresas, la gran mayoría de los gobiernos y algunas instituciones internacionales las que defienden esta postura⁵³ (como el BM⁵⁴). Estos actores se apoyan en la existencia de una gran cantidad de tierras "vacías" que, mediante inversiones, pueden servir para acabar con la crisis alimentaria, energética,

⁴⁵ SAN PEDRO, P., «La empresa española y los derechos humanos...», cit., p. 9.

⁴⁶ *Ibíd.*, p. 4.

⁴⁷ *Ibíd.*, p. 10.

⁴⁸ *Ibíd.*, p. 11.

⁴⁹ *Ibíd.*, p. 10.

⁵⁰ *Ibíd.*, p. 11.

⁵¹ ZAMORA, F.J., «Acaparamiento de tierras...», cit., p. 9.

⁵² DEL VISO, N., «Los nuevos amos de la tierra...», cit., p. 8.

⁵³ *Ibíd.*, p. 8.

⁵⁴ BORRAS, S., FRANCO, J., y WANG, C., Documento de debate *Tendencias políticas en disputa para la gobernanza global del acaparamiento de tierras*, Transnational Institute (TNI), 2012, p. 11.

económica y climática, y defienden un proceso más rápido y barato de obtención de tierras⁵⁵.

Muchos países anfitriones favorecen las inversiones negativas. En primer lugar, porque consideran que pueden crear empleo en las zonas rurales y, por consiguiente, beneficiar la economía rural⁵⁶. La realidad es muy distinta, pues la mayor parte de los cultivos, como el de agrocombustibles, suelen requerir poco trabajo⁵⁷. Además, los inversores suelen contratar mano de obra barata, por lo que raramente se mejora la calidad de vida de la población local. Es más, normalmente esta mano de obra suele sustituirse por máquinas, eliminando así una gran cantidad de puestos de trabajo⁵⁸. En segundo lugar, porque estiman que la producción de alimentos puede mitigar la pobreza y aumentar la seguridad alimentaria de su propia población⁵⁹. Sin embargo, la gran mayoría de la producción cultivada en sus tierras se exporta. En muchos casos esta situación viene favorecida por el propio Estado anfitrión que busca *"incrementar sus ingresos provenientes de las exportaciones, en cuyo caso ven de forma positiva el hecho de que la mayor parte o la totalidad de la producción lograda gracias a la llegada de los inversores sean enviadas al extranjero"*⁶⁰. Otras razones más escondidas y reprobables de los gobiernos de origen juegan un papel importante en las inversiones negativas. Así pues, en muchos casos se desconoce a dónde van a parar los beneficios provenientes de las exportaciones y se presume que son los propios gobiernos locales los que capturan la mayor parte, e incluso aceptan sobornos para dar el consentimiento al acaparamiento de tierras⁶¹. De esta manera, el Estado huésped actúa como un Estado soberano cerrando los acuerdos sobre tierras, mientras que al mismo tiempo limita su autoridad territorial sobre ellas⁶².

Por otro lado, se encuentran aquellos que opinan que el acaparamiento es un proceso inevitable y su objetivo es regularlo para lograr reducir los impactos negativos derivados y maximizar las oportunidades para las poblaciones locales⁶³. Esta tendencia respalda el fortalecimiento de los derechos de propiedad en aras de proteger los derechos sobre la tierra de las personas, el reforzamiento de los

⁵⁵ BORRAS, S., FRANCO, J., y WANG, C., «Land & Sovereignty in the Americas...», cit., p. 5.

⁵⁶ FRIENDS FOR THE EARTH EUROPE, Informe *África, el acaparamiento de tierras: Un estudio sobre...*, cit., p. 14.

⁵⁷ *Ibíd.*, p. 14.

⁵⁸ *Ibíd.*, p. 21.

⁵⁹ DE SCHUTTER, O., «How not to think of land-grabbing...», cit., p. 252.

⁶⁰ *Ibíd.*, p. 252.

⁶¹ *Ibíd.*, p. 252.

⁶² FLEURKE, F., (2014), *A brief Introduction...*, cit., recuperado de <http://www.nvvn.nl/artikel/a-brief-introduction-to-the-phenomenon-of-land-grabbing/>

⁶³ DEL VISO, N., «Los nuevos amos de la tierra...», cit., p. 8.

estándares medioambientales y laborales, el establecimiento de una mayor consulta a la comunidad, y la incorporación de instrumentos de transparencia como el consentimiento previo, libre e informado de la población local⁶⁴.

Entre aquellos que defienden esta postura se encuentra la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (en adelante FAO)⁶⁵, que aprobó el 11 de mayo de 2012, en el seno del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (en adelante CSA), las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques⁶⁶. También en el seno de la CSA, se aprobaron el 15 de octubre de 2014 los Principios para la Inversión Responsable en la Agricultura y los Sistemas Alimentarios. Desde el sector empresarial, también se fomenta la adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas o Global Compact, así como la práctica de la Responsabilidad Social Corporativa. Ambas se explicarán más adelante.

La última posición existente tiene como objeto redefinir las inversiones en la tierra mediante inversiones, principalmente realizadas por el propio Estado (inversiones públicas) o por los pequeños campesinos y agricultores, con la finalidad de parar el acaparamiento de tierras. Propone también instrumentos como la transparencia, la consulta previa, libre e informada de las comunidades afectadas, el reconocimiento de los derechos de tierra, la responsabilidad en la tenencia de la tierra, etc.⁶⁷. Este sector está defendido por movimientos y organizaciones sociales. Una de las más importantes es la Vía Campesina⁶⁸.

En la actualidad, el nuevo marco regulatorio internacional incide en mayor medida sobre la segunda de las posiciones. Así, se está creando una regulación que se articula principalmente en la responsabilidad de las empresas y los Estados frente a los derechos humanos, favoreciendo de esta manera las inversiones positivas⁶⁹. Este tipo de inversiones son aquellas cuyo impacto genera crecimiento económico, sostenibilidad ambiental y reducción de la pobreza a largo plazo⁷⁰. Para ello, los Estados y de las empresas deben, en el ejercicio de sus actividades, ir encaminados a la protección y el respeto de los derechos humanos. Así, las inversiones positivas se

⁶⁴ FUHEM ECOSOCIAL, Informe *El acaparamiento global de tierras...*, cit., p. 26.

⁶⁵ DEL VISO, N., «Los nuevos amos de la tierra...», cit., p. 8.

⁶⁶ BORRAS, S., FRANCO, J., y WANG, C., Documento de debate *Tendencias políticas en disputa ...*, cit., p. 3.

⁶⁷ DEL VISO, N., «Los nuevos amos de la tierra...», cit., p. 8.

⁶⁸ FUHEM ECOSOCIAL, Informe *El acaparamiento global de tierras...*, cit., p. 27.

⁶⁹ SAN PEDRO, P. «La empresa española y los derechos humanos...», cit., p. 14.

⁷⁰ *Ibíd.*, p. 19.

centran en diversos aspectos. En primer lugar, respetar los derechos de tenencia de la tierra y los derechos de las comunidades que viven en ella. En segundo lugar, invertir en las comunidades afectadas por las inversiones ayudando al desarrollo económico, social y cultural de las mismas. En tercer lugar, proteger el medioambiente, ya que constituye el principal medio de vida de las comunidades rurales. Por último, generar un empleo que respete los derechos de los trabajadores mediante salarios dignos, condiciones adecuadas de seguridad y de higiene, libertad de asociación y no discriminación a la mujer⁷¹.

La mayoría de la normativa actual sobre la materia promueve básicamente dos procedimientos a seguir. El primero es la consulta previa, libre e informada a las comunidades afectadas por las inversiones, que ha de realizarse antes del inicio de cualquier actividad empresarial y ha de llevarse a cabo de conformidad con el Convenio número 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. La consulta podrá dar lugar al consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas. El segundo de los procedimientos es la transparencia en cada una de las actuaciones empresariales que desarrollen las compañías mediante la publicación de la información y el acceso a la misma, así como el establecimiento de un canal abierto entre la empresa y la comunidad que permita la comunicación entre ambos durante el desarrollo de la actividad empresarial en el territorio afectado por la inversión⁷².

En este contexto, la ONU ha elaborado recientemente los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos que van dirigidos, por un lado, a los Estados, aludiendo a su deber de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos, así como hacer cumplir este deber a las empresas de su territorio o jurisdicción, o que estén bajo su propiedad o control en países terceros. Por otro lado, los dirige a las empresas, indicando su responsabilidad de respetar los derechos humanos y de prevenir, mitigar o hacer frente a las consecuencias negativas que puedan producir⁷³.

Desde la UE se ha incitado a los Estados Miembros a que elaboren Planes Nacionales para la puesta en marcha de los Principios Rectores⁷⁴. En consecuencia, el Estado español elaboró el Plan Nacional sobre Empresa y Derechos Humanos que ha sido criticado por organizaciones sociales, en cuanto que sigue *"alejándose de cuestiones centrales como la ampliación de las obligaciones extraterritoriales desde la empresa*

⁷¹ Ibíd., pp. 20-24.

⁷² Ibíd., pp. 24-28.

⁷³ NACIONES UNIDAS, OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS, *Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos*, Nueva York y Ginebra, 2011.

⁷⁴ SAN PEDRO, P. «La empresa española y los derechos humanos...», cit., p. 31.

matriz a sus subsidiarias en terceros países; la noción de interdependencia, indivisibilidad y permeabilidad de las normas aplicables en materia de derechos humanos; la responsabilidad civil y penal de los dirigentes; el cumplimiento directo por parte de las transnacionales del Derecho Internacional; la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la doble imputación de empresas y directivos"⁷⁵. El borrador se remitió el 26 de junio de 2014 al Consejo de Ministros para su aprobación. Sin embargo se sigue a la espera de que sea aprobado⁷⁶.

VI. LOS CASOS DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS

Existen cientos de casos documentados de acuerdos comerciales realizados en los últimos años en los que se produce el acaparamiento de tierras⁷⁷. Las empresas españolas nunca se han caracterizado por este fenómeno. Aunque hasta el momento ha podido contar con un número mínimo de casos, en los últimos años se ha producido un aumento de tierras acaparadas, debido principalmente al proceso de internacionalización. Estos datos son preocupantes y abren el debate sobre los mecanismos legales para hacer frente a la responsabilidad de los Estados y de las empresas sobre los derechos humanos, no solo en el plano internacional, sino también en el nacional.

En los casos que se exponen a continuación se ha intentado plasmar los diferentes puntos de vista. Sin embargo, apenas se ha podido recabar información respecto a las posiciones de ciertos actores que intervienen en los casos. Así, los datos que se reflejan se han obtenido de fuentes como ONGs y organizaciones y asociaciones defensoras de la tierra, de las comunidades rurales e indígenas y de los derechos humanos, medios de comunicación, y publicaciones u obras que forman parte de trabajos de investigación, destacando el llevado a cabo por el profesor Uharte (en referencia al caso de Iberdrola), en el que recopila numerosas entrevistas a los afectados reflejados en su trabajo, y que se incorporan al caso expuesto.

⁷⁵ HERNÁNDEZ, J., Y RAMIRO, P., (2015), *¿Qué fue del Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos?*, lamarea, recuperado de <http://www.lamarea.com/2015/02/20/que-fue-del-plan-nacional-sobre-empresas-y-derechos-humanos/>

⁷⁶ *Ibid.*, recuperado de <http://www.lamarea.com/2015/02/20/que-fue-del-plan-nacional-sobre-empresas-y-derechos-humanos/>

⁷⁷ GRAIN, (2012), *Acaparamiento de tierras. Un lado oscuro de la inversión financiera*, Observatorio de Multinacionales en América Latina, recuperado de <http://omal.info/spip.php?article2585>

1. EL CASO DE EBRO FOODS Y MARRUECOS

Ebro Foods es una compañía multinacional con sede en Madrid que opera en el sector alimentario y cuyas actividades desarrolla en más de 25 países de todo el mundo. Es considerada mundialmente como la primera en el sector del arroz, y la segunda fabricante de pasta⁷⁸. Está integrada, entre otras, por marcas tan conocidas como Brillante, SOS, La Fallera o La Cigala⁷⁹. Entre los accionistas se encuentra el Gobierno Español, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), una entidad de Derecho Público que realiza actividades del sector privado y que depende del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas⁸⁰. El SEPI participa en el accionariado con un 10,22% del capital social de Ebro Foods⁸¹.

Desde el año 2001, Ebro Foods forma parte del Global Compact, o Pacto Mundial de las Naciones Unidas, una iniciativa de la ONU que tiene como objetivo adecuar las actividades, estrategias y políticas de la empresa a los diez principios que promulga en materia de derechos humanos, medio ambiente y anticorrupción⁸². Estos principios se resumen en: *"apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales; asegurarse de que no son cómplices en la vulneración de los mismos; apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; eliminar todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio; abolir el trabajo infantil; eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación; mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente; fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental; fomentar el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente; y trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno"*⁸³.

Asimismo, la compañía integra la Responsabilidad Social Corporativa (en adelante RSC) como uno de sus elementos fundamentales. Las prácticas de RSC son

⁷⁸ EBRO FOODS, *La compañía. Quiénes somos*, recuperado de <http://www.ebrofoods.es/la-compania/quienes-somos/>

⁷⁹ *Ibid.*, recuperado de <http://www.ebrofoods.es/la-compania/nuestras-marcas/>

⁸⁰ SEPI (GOBIERNO DE ESPAÑA. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS), *Conozca SEPI*, recuperado de <http://www.sepi.es/default.aspx?cmd=0001&IdContainer=5&lang=&idLanguage=&idContraste=>

⁸¹ *Ibid.*, recuperado de <http://www.sepi.es/default.aspx?cmd=0004&IdContent=228&idLanguage=&paginacion=0&SearchText=ebro%20foods&SearchEnt=&idContraste=>

⁸² UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT, *About us. Overview*, recuperado de <https://www.unglobalcompact.org/>

⁸³ UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT, *About us. The Ten Principles*, recuperado de <https://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html>

voluntarias, y se basan en que las empresas han de realizar sus actividades teniendo en cuenta no solo sus propios beneficios, sino también los de sus clientes, empleados, comunidades locales y medio ambiente⁸⁴. Por último, Ebro Foods presenta unos Códigos de Conducta desarrollados como guía para las actuaciones de la empresa, basados en la ética y en la moral, que tienen como objetivo la mejora tanto de la propia empresa como del bienestar social y medioambiental. Para ello, establece un compromiso con los derechos humanos y con el medio ambiente, entre otros, y elabora principios tales como *"no tomar decisiones sin considerar su valor ético"*, *"tener en cuenta los efectos secundarios de cada acción"*, *"buscar siempre la máxima credibilidad posible"*, *"abstenerse de utilizar indebidamente la posición de mercado de la compañía"* y, *"al decidir, considerar los grupos involucrados y respetar sus derechos"*⁸⁵.

A finales de los años noventa, la filial de Ebro Foods, Mundiriz, llegó a la región de Larache (Marruecos), donde comenzó a realizar sus actividades de cultivo de arroz. Actualmente ocupan acerca de 2.780 hectáreas del territorio de la región⁸⁶. Dichas actividades afectaron a la población de los alrededores, especialmente en la pequeña localidad de Chlihate que se dedicaba principalmente al ganado y al cultivo para el autoconsumo y al comercio en el pequeño mercadillo local. Hace tres años, la compañía decidió ampliar sus cultivos en las tierras que rodean la localidad de Chlihate, única fuente de ingresos y de medio de subsistencia de la población mediante el cultivo y el ganado. Así, el 14 de junio de 2012, Ebro Foods comenzó a sembrar en dichas tierras, provocando protestas y alzamientos de la población⁸⁷.

La comunidad demandaba más puestos de trabajo, la devolución de las tierras expropiadas que consideraban suyas y que se arreglase el problema del crecimiento del número de mosquitos que generaba la plantación que⁸⁸, a pesar de que la empresa ya había tomado medidas de fumigación, seguían siendo insuficientes⁸⁹. Además, los fertilizantes que la empresa empleaba había envenenado el agua de sus

⁸⁴ OBSERVATORIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA, *Qué es RSC*, recuperado de <http://observatoriorsc.org/la-rsc-que-es/>

⁸⁵ EBRO FOODS, *Responsabilidad Social Corporativa. Código de conducta*, recuperado de <http://www.ebrofoods.es/responsabilidad-social-corporativa/codigo-de-conducta/>

⁸⁶ CLAVO, E., (2012), *"No hay arroz para todos"*, recuperado de <http://www.elmundo.es/elmundo/2012/06/23/internacional/1340453891.html>

⁸⁷ VETERINARIOS SIN FRONTERAS, Informe *¿El derecho a la alimentación es una responsabilidad empresarial...?*, cit.

⁸⁸ CLAVO, E., (2012), *Un cordón militar protege en Marruecos a las empresa española de arroz La Cigala*, recuperado de <http://www.elmundo.es/elmundo/2012/06/18/espana/1340033578.html>

⁸⁹ SAN PEDRO, P. «La empresa española y los derechos humanos...», cit., p. 21.

tierras, causando la muerte de gran parte del ganado de la población local e imposibilitando que pudieran emplear dicha agua⁹⁰.

Ante estas protestas, el Gobierno de Marruecos desplegó cerca de 2000 militares, utilizando, según los manifestantes, medidas desmesuradas tales como gases lacrimógenos y pelotas de goma, así como dos helicópteros⁹¹. Como consecuencia, y según informó el periódico El Mundo, mucha de la población que había acampado en las proximidades de las hectáreas ocupadas por la empresa decidió esconderse en los bosques de alrededor por temor a ser detenidos y encarcelados. A pesar de que muchos afectados temieron desplazarse hasta los centros de salud, se calculó que hubo más de cien heridos y de treinta detenidos⁹².

Después de semanas de conflictos, el ejército de Marruecos finalmente desalojó a la comunidad, empleando la fuerza, para asegurar la siembra del arroz. Según un informe de la asociación Veterinarios sin Fronteras, esta acción fue "*denunciada por la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, que fue intermediada por la embajada española en Marruecos a petición de la empresa, según sus propias declaraciones*"⁹³. En este mismo informe, publicado poco tiempo después del suceso, Veterinarios Sin Fronteras denunciaba los hechos que habían tenido lugar, acusando a la compañía Ebro Foods de realizar malas prácticas y de no actuar conforme a los instrumentos internacionales establecidos.

Por su parte, Intermón Oxfam elaboró un informe sobre la empresa española y los derechos humanos, en el que colocaba como ejemplo a Ebro Foods como empresa que "*no respeta el principio de consentimiento previo, libre e informado de las comunidades y no invierten en las localidades donde operan*"⁹⁴. La compañía respondió con otro informe en el que alegaba, en primer lugar, la falta de veracidad del documento de Intermón Oxfam por no haber contrastado la información; en segundo lugar, la poca objetividad del informe y la emisión de numerosos juicios de valor; y en tercer lugar, la distorsión de la realidad que había supuesto la inversión en

⁹⁰ Ibíd., p. 21.

⁹¹ CLAVO, E., (2012), *Un cordón militar protege en Marruecos...*, cit., recuperado de <http://www.elmundo.es/elmundo/2012/06/18/espana/1340033578.html>

⁹² Ibíd., recuperado de <http://www.elmundo.es/elmundo/2012/06/18/espana/1340033578.html>

⁹³ VETERINARIOS SIN FRONTERAS, Informe *¿El derecho a la alimentación es una responsabilidad empresarial...*, cit.

⁹⁴ COMUNICARSE (COMUNICACIÓN DE RESPONSABILIDAD & SUSTENTABILIDAD EMPRESARIA) (2014), *Renovalia y Ebro Foods responden a los cuestionamientos de Intermón Oxfam por sus operaciones en México*, recuperado de <http://comunicarseweb.com.ar/?Renovalia+y+Ebro+Foods+responden+a+los+cuestionamientos+de+Intermon+Oxfam+por+sus+operaciones+en+M%E9xico&page=ampliada&id=11938>

Marruecos para la población⁹⁵. A día de hoy, el resultado del cultivo de arroz por parte de la compañía ha sido pobreza y migración⁹⁶. Los escasos puestos de trabajo creados (según el entonces presidente de Mundiriz, Manuel Jurado, unas seiscientas personas⁹⁷; según Veterinarios Sin Fronteras, una veintena⁹⁸) dada la automatización de las actividades agrícolas, la precariedad en las condiciones y salarios de los mismos y el poco terreno para cultivar, han hecho que la población emigre en busca de nuevas oportunidades⁹⁹.

Marruecos posee políticas de ayuda a la inversión que facilitan el asentamiento de empresas extranjeras en su territorio. Entre ellas destacan el Plan Maroc Vert, el Pacto por la Activación Industrial (Pacte pour l'Émergence Industriel) y el Fondo de Desarrollo Agrícola (Fonds pour le Développement Agricole)¹⁰⁰. Según Veterinarios Sin Fronteras, *"El 20% de la superficie fértil marroquí ya está orientada al cultivo industrial para la exportación, y en la medida que se fomente irá reduciendo aún más las oportunidades del gran número de pequeños agricultores y agricultoras que han garantizado hasta la fecha la seguridad alimentaria de la población local"*¹⁰¹.

Las actuaciones de la empresa Ebro Foods no podrían haberse realizado sin la ayuda de un marco legal e institucional nacional¹⁰². Así, según la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, la tierra afectada sobre la que se habían constituido derechos consuetudinarios era de patrimonio militar y se cedieron en régimen de alquiler a la empresa para su explotación¹⁰³. Según Olivier De Schutter, *"el marco internacional existente relativo a los 'derechos sobre la tierra' apenas se implementa y requiere un urgente trabajo de aclaración que contribuya a garantizar la realización del derecho a la alimentación"*¹⁰⁴. A pesar de ello, las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques, recogen en numerosos artículos el derecho de tenencia de los titulares legítimos de la tierra,

⁹⁵ EBRO FOODS, *Informe de respuesta al documento de Intermón: "La inversión de Ebro Foods en Marruecos"*, Ebro Foods, Madrid, 2013, p. 3.

⁹⁶ VETERINARIOS SIN FRONTERAS, *Informe ¿El derecho a la alimentación es una responsabilidad empresarial...*, cit.

⁹⁷ CLAVO, E., (2012), *Un cordón militar protege en Marruecos...*, cit., recuperado de <http://www.elmundo.es/elmundo/2012/06/18/espana/1340033578.html>

⁹⁸ VETERINARIOS SIN FRONTERAS, *Informe ¿El derecho a la alimentación es una responsabilidad empresarial...*, cit.

⁹⁹ Ibíd.

¹⁰⁰ Ibíd.

¹⁰¹ Ibíd.

¹⁰² Ibíd.

¹⁰³ CLAVO, E., (2012), *Un cordón militar protege en Marruecos...*, cit., recuperado de <http://www.elmundo.es/elmundo/2012/06/18/espana/1340033578.html>

¹⁰⁴ OLIVIER DE SCHUTTER, *Producción, recursos. Derechos sobre la tierra*, recuperado de <http://www.srfood.org/es/derechos-sobre-la-tierra>

tengan o no títulos acreditativos¹⁰⁵ (amparados en los derechos consuetudinarios legítimos de tenencia¹⁰⁶). Asimismo, el Principio 5 de los Principios para la Inversión Responsable en la Agricultura y los Sistemas Alimentarios establece el deber de *"respetar la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques y el acceso al agua"*¹⁰⁷. Sin embargo, ambos instrumentos internacionales poseen un carácter voluntario, por lo que no conllevan ningún tipo de responsabilidad internacional ni de rendición de cuentas. De igual manera, el Pacto Mundial (PM) o Global Compact (GC), del cual forma parte Ebro Foods, llama a las empresas a adoptar los nueve principios en los ámbitos de los derechos humanos, las normas laborales y el medio ambiente. Sin embargo, no establece un cuerpo normativo internacional, sino que es un programa voluntario de carácter no vinculante¹⁰⁸. Lo mismo puede decirse de las prácticas de RSC.

2. EL CASO DE IBERDROLA Y OAXACA

Iberdrola es una empresa española con sede en Bilbao, cuya actividad consiste en la producción y el suministro de energía. Debido a su proceso de internacionalización, la compañía está presente en más de treinta países del mundo y es principal operadora en España, Reino Unido, Estados Unidos, México y Brasil. Iberdrola se proyecta como líder en energía eólica y una de las mayores pioneras en investigación sostenible, en especial en la energías del mar, invirtiendo en más de doscientos proyectos de I+D+i (en 2014, 170 millones de euros). Está reconocida como una de las cinco "utilities" más innovadoras de Europa. La empresa cuenta con más de treinta mil empleados en todo el mundo (datos del 2014)¹⁰⁹. En su compromiso con el medio ambiente y el desarrollo sostenible, Iberdrola posee políticas de RSC y de sostenibilidad. Ostenta un compromiso ético y de respeto con el entorno que implica el mantenimiento de relaciones con los grupos de interés (accionistas, trabajadores, clientes, medio ambiente y sociedad, entre otros). Por último, a principios de 2015, la empresa ha

¹⁰⁵ Artículo 3 de las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques (2012)

¹⁰⁶ Artículo 5.3 de las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques (2012)

¹⁰⁷ Artículo 26 de los Principios para la Inversión Responsable en Agricultura y los Sistemas Alimentarios (2014)

¹⁰⁸ VETERINARIOS SIN FRONTERAS, Informe *¿El derecho a la alimentación es una responsabilidad empresarial...?*, cit.

¹⁰⁹ IBERDROLA, *Una gran empresa*, recuperado de <http://www.iberdrola.es/conocenos/una-gran-empresa/#>

aprobado tres políticas de RSC, entre las que cabe destacar las Políticas de relaciones con los Grupos de interés y las Políticas de respeto de los derechos humanos¹¹⁰.

En la primera década del siglo XXI, Iberdrola llegó a México aprovechando la apertura económica del país al capital extranjero a raíz de la privatización masiva. Esta apertura fue propiciada por el cambio de modelo de desarrollo que se produjo como consecuencia de la crisis del desarrollismo¹¹¹, así como por las presiones del BM y del Fondo Monetario Internacional, según denuncia el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)¹¹². En este contexto, se comenzó a desarrollar un proyecto eólico de grandes dimensiones financiado por el BM y por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)¹¹³.

La región del Istmo de Tehuantepec, situado en el Estado de Oaxaca, es considerada globalmente como una de las mejores en cuanto a las condiciones de viento, por lo que ostenta un potencial indudable en cuanto al aprovechamiento de la energía eólica¹¹⁴. Esta situación, junto a la apertura del país al capital extranjero, atrajo a las multinacionales que deseaban instalar parques eólicos en la zona. Así, Iberdrola construyó tres parques eólicos en el territorio de Oaxaca: La Ventosa, Bi Nee Stipa y la Venta III¹¹⁵. Diversas fuentes consultadas por Uharte denunciaron el supuesto engaño para hacer firmar a sus habitantes, con ayuda de las autoridades locales, contratos de arrendamiento de tierras muy desventajosos, realizando promesas sobre los grandes beneficios económicos que produciría y sobre la gran cantidad de puestos de trabajo que crearía, aprovechándose del desconocimiento normativo de la población y de la precariedad y las necesidades sociales y utilizando la presión, todo ello sin información transparente y veraz sobre las implicaciones de los contratos realizados¹¹⁶ y sin proceso de consulta colectiva¹¹⁷. Como consecuencia, según las entrevistas realizadas por Uharte, los afectados se quejaron de haber arrendado sus tierras por cantidades muy inferiores a las que se les paga a otros arrendatarios de tierras para estos fines (por ejemplo, en Estados Unidos o en España casi ocho veces más). Iberdrola incluso

¹¹⁰ IBERDROLA, *Nuestros compromisos*, recuperado de <http://www.iberdrola.es/reputacion-sostenibilidad/nuestros-compromisos/>

¹¹¹ UHARTE, L.M., «Las multinacionales en el siglo XXI: impactos múltiples: El caso de Iberdrola en México y en Brasil», 2015 y más núm. 4, 2012, p. 83.

¹¹² SISCAR, M., (2010), *Lo que la energía eólica española se llevó*, Observatorio de Multinacionales en América Latina, recuperado de <http://omal.info/spip.php?article1552>

¹¹³ UHARTE, L.M., «Las multinacionales en el siglo XXI: impactos múltiples...», cit., p. 100.

¹¹⁴ *Ibíd.*, p. 99.

¹¹⁵ *Ibíd.*, p. 85.

¹¹⁶ *Ibíd.*, pp. 109-110.

¹¹⁷ SISCAR, M., (2010), *Lo que la energía eólica española se llevó*, cit., recuperado de <http://omal.info/spip.php?article1552>

les pagaba menos que el resto de empresas energéticas que operan en Oaxaca¹¹⁸. Por ello, muchos de los firmantes de los contratos pidieron la nulidad de los mismos¹¹⁹. En cuanto a las consecuencias, ya no para los arrendadores de las tierras, sino para toda la población del territorio del Istmo, han sido negativas en los siguientes aspectos:

En el aspecto laboral, no es cierto que se crearan más puestos de trabajo, y los que se crearon fueron para la construcción de la planta eólica. Una vez realizada, la mayoría de los trabajadores fueron despedidos, ya que no se requiere de mucha mano de obra para su mantenimiento. Además, la mayoría de los trabajadores procedían de España y no de la población local, como había prometido Iberdrola. Tampoco los salarios se correspondían con las promesas de la empresa, que realizaron subcontratas para pagar menos a sus trabajadores y con medidas de seguridad precarias¹²⁰.

En el aspecto económico y social, cabe mencionar que los habitantes del territorio de Oaxaca se dedican principalmente a la ganadería y a la agricultura, en especial al cultivo de maíz y de sorgo¹²¹. Así, el polvo levantado por los camiones y la maquinaria ha provocado la contaminación de los pastos y, como consecuencia, el ganado de la población local no come, y si lo hace, enferma. Además, el desnivel del suelo que ha causado la empresa por la construcción de carreteras entre la tierra que se utiliza para sembrar ha provocado que, cuando hay lluvias, se inunden y se pierdan todas las cosechas por la acumulación de agua. La pérdida de aceite de los motores de los camiones y de la maquinaria también ha sido otro problema, arruinando los prados para el pasto del ganado y los cultivos por la expansión del aceite en las épocas de lluvia¹²².

Las implicaciones negativas que se acaban de mencionar dieron lugar a un levantamiento social que ha sido reprimido duramente¹²³. Así, los testimonios recogidos entre la población hacen referencia a amenazas, violencia y detenciones: *"Orlando Carrasco (2012), uno de los arrendatarios en este parque, nos confirmó en entrevista personal que la empresa les envió a la policía en más de una ocasión, cuando decidieron movilizarse para reclamar un pago más digno por el alquiler de sus*

¹¹⁸ UHARTE, L.M., «Las multinacionales en el siglo XXI: impactos múltiples...», cit., p. 107.

¹¹⁹ Ibíd., p. 109.

¹²⁰ Ibíd., pp. 113- 114.

¹²¹ SISCAR, M., (2010), *Lo que la energía eólica española se llevó*, cit., recuperado de <http://omal.info/spip.php?article1552>

¹²² UHARTE, L.M., «Las multinacionales en el siglo XXI: impactos múltiples...», cit., pp. 114-115.

¹²³ GARZÓN, A., (2013), *Aníbal Garzón Baeza entrevista a Luismi Uharte. Las multinacionales como Iberdrola son las instituciones dominantes en el capitalismo actual*, recuperado de <http://omal.info/spip.php?article4873>

terrenos. En el parque de la Ventosa, también gestionado por Iberdrola, el proceso fue muy similar, según testimonios de habitantes del municipio. López Toledo (2012), ejidatario de la zona que alquiló terrenos a la multinacional, confesó: 'Me amenazaron de muerte [...] que tenía que estar quieto [...] hasta con mi familia me amenazaron [...] me decían, aléjate porque si no van a hacer algo con tu familia'. Los niveles de criminalización han llegado a tal extremo que varios de los entrevistados confesaron haber sido presionados y amenazados por la corporación (Zapata, 2012; Villa, 2012; Zambrano, 2012), pero solicitaron que su identidad real no apareciera reflejada en este informe por el miedo a las posibles represalias que podían tomar la empresa y las autoridades."¹²⁴.

También se denunció, por parte del Congreso Nacional Indígena en 2011, la "criminalización de luchadores indígenas de las comunidades y pueblos de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec, que resisten contra la imposición y despojo de sus tierras [...]. El voraz despojo de nuestros territorios y espacios sagrados, que promueven las empresas tales como la CFE, Iberdrola, Acciona-Cemex [...] todas ellas participantes en el corredor Eólico del istmo [...]. El silencio y la complicidad de los gobiernos federal y del estado de Oaxaca ante la inminente violación de nuestros derechos fundamentales como pueblos y comunidades Indígenas del Istmo de Tehuantepec..."¹²⁵.

Las denuncias han seguido teniendo lugar durante los últimos años. Así, en 2013 el Congreso Nacional Indígena declaró: "En el Istmo de Tehuantepec, donde habitan el pueblo Ikoots y Binniza de las comunidades de San Mateo del Mar y San Dionisio del Mar, así como el pueblo de Juchitán y la colonia Álvaro Obregón; las empresas Endesa, Iberdrola [...] están despojando tierras comunales y destruyendo lugares sagrados en toda esta región, donde han sido ocupadas de manera ilegal más de 32 mil hectáreas donde han instalado 1600 aerogeneradores en Juchitan y Unión Hidalgo por los parques eólicos Biiyoxo y Piedra Larga I y II en tierras comunales desde el año 2001"¹²⁶.

A día de hoy, la oposición a las multinacionales y las protestas de la población siguen arraigadas, y se ha emprendido una larga lucha en contra de las actuaciones del Gobierno Mexicano así como de las empresas que operan en el lugar, resistiendo

¹²⁴ UHARTE, L.M., «Las multinacionales en el siglo XXI: impactos múltiples...», cit., p. 111.

¹²⁵ POZOL COLECTIVO (2011), *Congreso Nacional Indígena. San Mateo del Mar , territorio ikoots, Istmo de Tehuantepec, Oaxaca a 27 de noviembre de 2011*, recuperado de <http://www.pozol.org/?p=3828>

¹²⁶ POZOL COLECTIVO (2014), *Los espejos en las resistencia*, recuperado de <http://www.pozol.org/?p=9702>

incluso a los ataques de paramilitares financiados por éstos, según el testimonio de la población¹²⁷. En 2012 se inició un proceso judicial en contra de la integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (en adelante RNDDHM), Lucila Bettina Cruz Velázquez, por los delitos de privación ilegal de la libertad y delitos contra el consumo y la riqueza nacional¹²⁸. Según la asociación, este proceso se llevó a cabo como una *"estrategia de intimidación, persecución y criminalización a su labor, y ha sido evidente que dicho proceso judicial tuvo como único fin, limitar el hacer de la defensora y servir como un mecanismo de criminalización de la protesta social"*¹²⁹, en virtud de lo dispuesto en los artículos 2, 9, 12, 14 y 15 de la Declaración de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de la ONU, así como lo establecido en la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos¹³⁰. Finalmente, este año se ha procedido a la absolución de la integrante de la RNDDHM¹³¹, aunque no todos los casos terminan de esta manera. Es de notable importancia, pues, la situación que viven los defensores de los derechos de la tierra y de los derechos humanos, que se exponen a graves peligros e incluso a la muerte. Es por ello que en las Naciones Unidas se nombren Relatores Especiales para la situación de aquellos¹³².

En definitiva, el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado es un derecho *"que obliga a los Estados a celebrar consultas con estos pueblos en función de razones especiales que atañen solo a los pueblos indígenas y tribales ya que está vinculada con el derecho a la identidad y la integridad cultural, el derecho a conservar las propias instituciones, usos y costumbres, el derecho al*

¹²⁷ GONZÁLEZ, J., (2015), *De la rebeldía a la autonomía: pueblos del Istmo de Tehuantepec luchan contra Trasnacionales y Gobierno*, Proyecto Ambulante, recuperado de <http://www.proyectoambulante.org/index.php/noticias/oaxaca/item/5779-de-la-rebeldia-a-la-autonomia-pueblos-del-istmo-de-tehuantepec-luchan-contra-trasnacionales-y-gobierno>

¹²⁸ INTERNATIONAL SERVICE FOR HUMAN RIGHTS (ISHR), *México: Juzgado retira cargos penales infundados contra Bettina Cruz Velázquez*, recuperado de <http://www.ishr.ch/news/mexico-juzgado-retira-cargos-penales-infundados-contra-bettina-cruz-velazquez>

¹²⁹ ASAMBLEA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO (APIITDTT) (2014), *Asunto: Resolución sobre la situación legal de la defensora Lucila Bettina Cruz Velázquez*, recuperado de <https://tierrayterritorio.wordpress.com/2014/08/28/asunto-resolucion-sobre-la-situacion-legal-de-la-defensora-lucila-bettina-cruz-velazquez/>

¹³⁰ *Ibíd.*, recuperado de <https://tierrayterritorio.wordpress.com/2014/08/28/asunto-resolucion-sobre-la-situacion-legal-de-la-defensora-lucila-bettina-cruz-velazquez/>

¹³¹ INTERNATIONAL SERVICE FOR HUMAN RIGHTS (ISHR), *México: Juzgado retira cargos penales infundados contra Bettina Cruz Velázquez*, recuperado de <http://www.ishr.ch/news/mexico-juzgado-retira-cargos-penales-infundados-contra-bettina-cruz-velazquez>

¹³² ZAMORA, F.J., «Desarrollo sostenible y empresas...», cit., p. 23.

territorio y los recursos y el derecho a decidir sus propias prioridades de desarrollo, entre otros"¹³³. Este derecho se recoge en una amplia normativa internacional, entre otros, en el artículo 9.9 de las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional de la FAO, en el artículo 32.2 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y en el Convenio número 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Sin embargo, hasta hace bien poco, el BM se resistía a recomendar la incorporación del consentimiento libre, previo e informado a las políticas del Grupo del BM¹³⁴. Pero en 2014, inició las deliberaciones para un nuevo marco normativo destinado a mantener y desarrollar las protecciones existentes para las poblaciones indígenas y vulnerables, las comunidades y el medio ambiente¹³⁵.

En cuanto a México, la modificación en 2014 de la Ley Energética ha permitido al sector privado la posibilidad de distribuir electricidad, actividad que hasta esa fecha solo se permitía a la Comisión Federal de Electricidad del país¹³⁶. En este contexto, los levantamientos y las protestas sociales han conseguido impedir la construcción de algunos de los proyectos eólicos de otras multinacionales, como por ejemplo, en 2014, del parque eólico de 396 megavatios en Santa Teresa (municipio de San Dionisio del Mar, en el Istmo de Tehuantepec) por la transnacional Mareña Renovables¹³⁷. A parte de México, también se están detectando problemas en regiones como Belo Monte (Brasil), y en poblaciones como la aymara en El Alto (Guatemala), y las comunidades indígenas Lencas en el Departamento de Francisco Morazán (Honduras)¹³⁸.

¹³³ CLAVERO, B., *Consulta y consentimiento previo, libre e informado a la luz de del derecho internacional de los derechos humanos*, recuperado de http://www.redunitas.org/Consulta_BC.pdf

¹³⁴ MACKAY, F., (2004), *El Derecho de los Pueblos Indígenas al Consentimiento Libre, Previo en Informado y la Revisión de las Industrias Extractivas del Banco Mundial*, Forest People Programme, recuperado de <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/10/eiripsfpicjun04sp.pdf>

¹³⁵ BANCO MUNDIAL (2014), *Comunicado de prensa. El Banco Mundial inicia las deliberaciones sobre la propuesta para fortalecer las salvaguardas sociales y ambientales*, recuperado de <http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2014/07/30/world-bank-begin-discussions-proposal-strengthen-social-environmental-safeguards>

¹³⁶ ÁLVARO, C., (2015), *Iberdrola, Gamesa y Acciona dan las alas a la eólica*, Capital Madrid, recuperado de <https://www.capitalmadrid.com/2015/1/28/36870/iberdrola-gamesa-y-acciona-dan-a-las-a-la-eolica.html>

¹³⁷ ROJAS, R., (2014), *Muerto, proyecto eólico en San Dionisio, Oaxaca*, Sociedad y Justicia, recuperado de <http://www.jornada.unam.mx/2014/01/09/sociedad/035n1soc>

¹³⁸ UHARTE, L.M., «Las multinacionales en el siglo XXI: impactos múltiples...», cit., p. 81-82.

A día de hoy existen treinta y un parques eólicos en funcionamiento¹³⁹, y veinte de ellos operan en el territorio de Oaxaca. Además, la empresa ha iniciado un proyecto, junto con la empresa también española Gamesa, para la instalación de otro parque eólico en el municipio de Esperanza, Pier II¹⁴⁰. Por lo tanto, no parece que esta situación vaya a detenerse.

3. EL CASO DE ENDESA, CHILE Y COLOMBIA

Endesa es una empresa española dedicada principalmente a la producción y distribución en el mercado eléctrico y del gas, y considerada líder en el sector eléctrico español. Desde 2009, Endesa forma parte del Grupo italiano Enel, que opera en más de treinta países y cuenta con aproximadamente 61 millones de usuarios por todo el mundo¹⁴¹. En su política de responsabilidad esta multinacional posee diversos compromisos, entre ellos, con el buen gobierno, el comportamiento ético y la transparencia (que incluye un plan de tolerancia cero contra la corrupción), así como con la protección del entorno¹⁴². Además, está adherida al Pacto Mundial de la ONU desde 2002 y a sus diez principios¹⁴³, y en sus prácticas se encuentra el diálogo con los grupos de interés de la empresa¹⁴⁴.

En América del Sur, Endesa posee un gran número de centrales hidroeléctricas, situadas en los territorios de Colombia, Brasil, Perú, Chile y Argentina¹⁴⁵. Solo en Colombia, la empresa ha construido nueve hidroeléctricas¹⁴⁶. En Chile, el número se eleva a dieciséis¹⁴⁷. De esta manera, las centrales hidroeléctricas se configuran como

¹³⁹ ASOCIACIÓN MEXICANA DE ENERGÍA EÓLICA (AMDEE), *El viento en números*, recuperado de <http://www.amdee.org/viento-en-numeros>

¹⁴⁰ IBERDROLA (2014), *Iberdrola inicia en México la construcción del parque eólico de Pier II, de 66 megavatios*, recuperado de <http://multimediamprofesionales.iberdrola.es/Noticias/IBERDROLA,INICIA,MEXICO,CONSTRUCCION,PARQUE,EOLICO,PIER,MEGAVATIOS,1495.html>

¹⁴¹ ENDESA, *Conoce Endesa. Quiénes somos. Grupo Enel*, recuperado de <http://www.endesa.com/es/conoceendesa/nuestraestrategia/GrupoEnel>

¹⁴² ENDESA, *Sostenibilidad*, recuperado de <http://www.endesa.com/es/sostenibilidad/home>

¹⁴³ ENDESA, *Sostenibilidad. Pacto Mundial*, recuperado de <http://www.endesa.com/es/sostenibilidad/pactoMundial>

¹⁴⁴ ENDESA, *Sostenibilidad. Diálogo con grupos de interés*, recuperado de <http://www.endesa.com/es/sostenibilidad/DialogoGrupos/DialogoGruposInteres>

¹⁴⁵ ENDESA CHILE, *Conózcenos. Nuestro negocio. Centrales generadoras*, recuperado de <http://www.endesa.cl/es/conocenos/nuestronegocio/centrales/Paginas/home.aspx>

¹⁴⁶ ENDESA CHILE, *Conózcenos. Nuestro negocio. Centrales generadoras. Colombia Hidroeléctricas*, recuperado de <http://www.endesa.cl/es/conocenos/nuestronegocio/centrales/Paginas/colombiahidro.aspx>

¹⁴⁷ ENDESA CHILE, *Conózcenos. Nuestro negocio. Centrales generadoras. Chile Hidroeléctricas*, recuperado de <http://www.endesa.cl/es/conocenos/nuestronegocio/centrales/Paginas/chilehidro.aspx>

uno de los factores que más impulsan la economía colombiana y chilena, ello debido a la gran fuerza de la corriente de sus ríos.

En Chile, la propia Constitución permite la privatización de las aguas. Así, el artículo 19.24 de la misma establece que: *"los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos"*¹⁴⁸. En cuanto al Código de Aguas chileno de 1981, Marcos Saavedra, Director Regional de Aguas de la Región de La Araucanía, expone que: *"éste ha sido considerado por muchos como el más liberal del mundo, ha generado polémica desde el año de su publicación (1981). De acuerdo con diversos artículos sobre gestión de recursos hídricos, una de las principales críticas se centra en que esta Ley produciría 'acaparamiento' y especulación de Derechos de Aprovechamiento de Aguas, lo que impediría un adecuado funcionamiento del mercado y la reasignación óptima, que es precisamente lo que busca el modelo de gestión, plasmado jurídicamente en lo que se denomina Código de Aguas"*¹⁴⁹. La mayoría de los derechos del agua son comprados por las multinacionales para la construcción de centrales hidroeléctricas. De esta manera, se calcula que la compañía Enel-Endesa, junto con la empresa chilena Colbún y la estadounidense AES Gener, son dueñas del ochenta por ciento de los recursos hídricos chilenos¹⁵⁰.

Para establecer un claro ejemplo de las afectaciones que se producen, hay que remontarse a la construcción de las centrales hidroeléctricas de Pangué, inaugurada en 1996, y de Ralco, inaugurada en 2003¹⁵¹. La segunda de las centrales hidroeléctricas, Ralco, fue puesta en marcha pese a la oposición inicial de la Comisión Nacional de Medio Ambiente y de la Cooperación Nacional de Desarrollo Indígena. Sin embargo, obtuvo un gran apoyo del Gobierno chileno¹⁵². Como consecuencia, la presa impactó a unas 3.460 hectáreas de bosques nativos, e inundó dos comunidades indígenas pehuenches integradas por más de quinientas personas¹⁵³, que fueron

¹⁴⁸ Artículo 19.24 de la Constitución Política de la República de Chile, recuperado de http://www.oas.org/dil/esp/constitucion_chile.pdf

¹⁴⁹ SAAVERDA, M., *Economía de Chile. Código de Aguas chileno y reforma 2005: los problemas con la asignación inicial en la Araucanía*, Observatorio De La Economía Latinoamericana, recuperado de <http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/cl/2008/msb.htm>

¹⁵⁰ CASTRO, N., (2014), «El modelo del modelo. Las represas al sur de Chile», cit., recuperado de <http://www.revistapueblos.org/?p=18205>

¹⁵¹ Ibíd., recuperado de <http://www.revistapueblos.org/?p=18205>

¹⁵² Ibíd., recuperado de <http://www.revistapueblos.org/?p=18205>

¹⁵³ OBSERVATORIO LATINOAMERICANO DE CONFLICTOS AMBIENTALES (2015), *Chile. Amenazas hidroeléctricas en la Araucanía: transnacional Endesa acapara aguas en Curacautín*, recuperado de <http://olca.cl/articulo/nota.php?id=105071>

reubicadas bajo la promesa de empleo, progreso y fomento del turismo¹⁵⁴. Los mismos hechos habían sucedido anteriormente con la puesta en marcha de la central Pangué, en el cual el BM financió 150 de los 340 millones que costó el proyecto hidroeléctrico¹⁵⁵. Dos años más tarde, el entonces presidente del BM reconoció el mal trabajo realizado por la institución en la evaluación del impacto que produciría la construcción de la central, y declaró que la población indígena había sido desalojada de sus tierras¹⁵⁶.

En la actualidad, la filial de Endesa, Endesa Chile, ha iniciado otro proyecto hidroeléctrico en el lago Neltume. La oposición de la población es firme, dado que supondrá el desplazamiento y reasentamiento permanente de las comunidades que habitan en la zona, así como una gran pérdida cultural ya que se imposibilitará la realización de las actividades ancestrales y ceremonias sagradas, y una pérdida ambiental considerable, incluidas especies de flora bajo protección¹⁵⁷. Este proyecto ha sido objeto de consulta a las comunidades indígenas afectadas en virtud del Convenio número 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Este Convenio fue ratificado en 2008 por Chile¹⁵⁸ y por lo tanto es vinculante. Sin embargo, el proceso de consulta se ha llevado a cabo por el Servicio de Evaluación Ambiental del Gobierno de Chile (en adelante SEA), lo que ha suscitado entre la población indígena dudas sobre la veracidad y el respeto a dicho Convenio¹⁵⁹. Como consecuencia, el año pasado las comunidades afectadas presentaron un recurso contra la consulta por no respetar supuestamente los estándares internacionales del Convenio así como los derechos colectivos de las comunidades. El recurso se desestimó. Más tarde se apeló a la Corte Suprema del país, pero también fue desestimado a favor del SEA¹⁶⁰.

¹⁵⁴ CASTRO, N., (2014), «El modelo del modelo. Las represas al sur de Chile», cit., recuperado de <http://www.revistapueblos.org/?p=18205>

¹⁵⁵ Ibíd., recuperado de <http://www.revistapueblos.org/?p=18205>

¹⁵⁶ NAMUNCURA, D., *Ralco: ¿represa o pobreza?*, Colección Sin Norte, Santiago de Chile, 1999, p. 65.

¹⁵⁷ OBSERVATORIO LATINOAMERICANO DE CONFLICTOS AMBIENTALES (2015), *Chile. Amenazas hidroeléctricas en la Araucanía...*, cit., recuperado de <http://olca.cl/articulo/nota.php?id=105071>

¹⁵⁸ ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, *Ratificación del C169-Convenio sobre pueblos indígenas y tribales*, 1989, recuperado de http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312314

¹⁵⁹ OBSERVATORIO LATINOAMERICANO DE CONFLICTOS AMBIENTALES (2014), *Chile. Mapuches recurren de protección contra consulta indígena de hidroeléctrica Neltume de Endesa*, recuperado de <http://olca.cl/articulo/nota.php?id=104169>

¹⁶⁰ OBSERVATORIO LATINOAMERICANO DE CONFLICTOS AMBIENTALES (2014), *Chile. Comunidades plantean su total rechazo a Consulta indígena por la Central Neltume de Endesa Enel*, recuperado de <http://olca.cl/articulo/nota.php?id=104756>

Desde que comenzó el proyecto de la hidroeléctrica, diversas organizaciones han denunciado cooptación de líderes, sobornos y hostigamiento de dirigentes indígenas¹⁶¹. A pesar de las trabas, las comunidades indígenas de los territorios afectados por el proyecto de la central hidroeléctrica de Neltume siguen con la lucha y las protestas con el objetivo de impedir la inundación de sus tierras desde hace generaciones. Por otro lado, Endesa no parece que vaya a dejar de realizar este tipo de proyectos, de hecho, a día de hoy es propietaria de cinco inscripciones de derechos de agua del río Cautín, en la región de Araucanía¹⁶².

En Colombia la situación se desarrolla de manera idéntica. El último de los proyectos hidroeléctricos más controvertidos por la filial de Endesa en el país, Emgesa, ha sido la construcción de la central hidroeléctrica de El Quimbo, en el río Magdalena, que fluye por la región de Huila¹⁶³. Desde 1997, momento en que la empresa propuso el proyecto, no se autorizó debido a que los estudios de impacto ambiental nunca habían sido aprobados. Sin embargo, años después el Gobierno decidió aprobarlo¹⁶⁴, mediante la eliminación de uno de los trámites que habían motivado el rechazo del mismo (del Diagnóstico Ambiental de Alternativa)¹⁶⁵. Desde entonces, la construcción de la central está ocasionando miles de desplazamientos forzados por la inundación de tierras. En una declaración de uno de los afectados, éste describió cómo *"el 13 de enero pasado (del 2013) se encontraba en casa con sus hijos cuando un operativo conjunto del Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios) de la Policía Nacional y del Ejército lo sacó a la fuerza de su casa. Luego, la tumbaron"*¹⁶⁶. El desalojo fue ordenado por el alcalde del municipio y ejecutado en presencia, entre otros, del Secretario de Gobierno, del jefe de la Unidad de Justicia, de un delegado de la Defensoría del Pueblo, y de funcionarios de la empresa Emgesa¹⁶⁷.

¹⁶¹ COORDINACIÓN POR LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, *Neltume: megaproyecto hidroeléctrico de Endesa amenaza el territorio Mapuche*, recuperado de <http://www.codpi.org/observatorio/122-neltume-megaproyecto-hidroelectrico-de-endesa-amenaza-el-territorio-mapuche>

¹⁶² OBSERVATORIO LATINOAMERICANO DE CONFLICTOS AMBIENTALES (2015), *Chile. Amenazas hidroeléctricas en la Araucanía...*, cit., recuperado de <http://olca.cl/articulo/nota.php?id=105071>

¹⁶³ PULIDO, A., *Susurros del Magdalena. Los impactos de los megaproyectos en el desplazamiento forzado*, Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi, Bilbao, 2014, p. 9.

¹⁶⁴ *Ibíd.*, p. 14.

¹⁶⁵ *Ibíd.*, p. 71.

¹⁶⁶ BELLANI, O., (2013), *El pueblo contra el Quimbo*, Otramérica, recuperado de <http://otramerica.com/radar/el-pueblo-contra-quimbo-o-las-heridas-modelo-extractivo-colombia/2860>

¹⁶⁷ *Ibíd.*, recuperado de <http://otramerica.com/radar/el-pueblo-contra-quimbo-o-las-heridas-modelo-extractivo-colombia/2860>

El proyecto abarca grandes magnitudes, pues se prevé la inundación de cerca de nueve mil hectáreas productivas¹⁶⁸, y de cinco municipios de la región¹⁶⁹. Además, entre los impactos ambientales que se prevé se encuentra la desaparición de tierras fértiles, la modificación del clima regional, la desaparición de la pesca y la contaminación del agua debido a las reacciones químicas y biológicas producidas por el estancamiento del agua. Todo ello producirá una gran inseguridad alimentaria de la región y, por tanto, el empeoramiento de las condiciones de vida de la población¹⁷⁰. En cuanto a las personas afectadas por la inundación, las organizaciones sociales amplían drásticamente el número de afectados que reconoce Emgesa¹⁷¹. Además, se ha cuestionado el equilibrio de las partes (empresa y afectados) en las negociaciones en cuanto a la protección de la parte más débil, y se han denunciado presiones indebidas, ofreciendo bajas compensaciones y realizando amenazas de expropiación¹⁷². La empresa *"ha utilizado también amparos policiales que legitiman el desalojo violento y demandas de expropiación contra quienes no abandonen sus predio"*¹⁷³. Además de las comunidades cuyas poblaciones van a ser inundadas, cabe incluir en la lista de afectados a aquellas personas que trabajan las tierras de esa región, así como aquellas que se dedican a la pesca del río Magdalena. Tampoco ellas han sido reconocidas por la empresa para percibir compensación¹⁷⁴.

Ante la situación, se produjeron diversas actuaciones por parte de otros organismos estatales encaminadas a la suspensión o, en su caso, debida indemnización, entre ellos, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, y la Corte Constitucional¹⁷⁵. Todas ellas en base a la provocación de una *"situación de amenaza y a la violación del derecho a una vida digna, al mínimo vital, a una vivienda digna, al trabajo, a la seguridad alimenta, al medio ambiente sano y a la participación pública efectiva"*¹⁷⁶. El Informe Nacional de Desarrollo Humano para Colombia (2011) ha establecido sobre el despojo de las tierras en general que: *"Con el despojo no solo se pierde la tierra como bien material, también la pertenencia a un lugar y los lazos sociales; se erosionan las redes sociales, se deterioran los medios de subsistencia e ingresos de las familias, se fragmenta la unidad familiar, se acaban proyectos de vida, se configura un destierro, se genera un desplazamiento forzado y las víctimas bajan*

¹⁶⁸ PULIDO, A., *Susurros del Magdalena...*, cit., p. 15.

¹⁶⁹ *Ibíd.*, p. 22.

¹⁷⁰ *Ibíd.*, pp. 32-33.

¹⁷¹ *Ibíd.*, p. 50.

¹⁷² *Ibíd.*, p. 51.

¹⁷³ *Ibíd.*, p. 51.

¹⁷⁴ *Ibíd.*, p. 51.

¹⁷⁵ *Ibíd.*, pp. 75 y 85.

¹⁷⁶ *Ibíd.*, pp. 85-86.

en la escala social y en calidad de vida"¹⁷⁷. La central hidroeléctrica de El Quimbo, que comenzó a construirse en 2008, ha finalizado sus obras y comenzará a generar energía a partir de julio de 2015¹⁷⁸.

Los afectados por los proyectos hidroeléctricos han declarado un patrón común en las actuaciones de Endesa para vencer la resistencia de las comunidades afectadas por la construcción de represas: " '*Endesa compra conciencias, lleva fardos de pasto como regalos a cambio de una firma*', explica el activista mapuche Jorge Weke, fundador del *Parlamento de Koz Koz, una organización muy activa contra la represa de Neltume*"¹⁷⁹. Asimismo, los afectados declaran que Endesa otorga indemnizaciones privadas y de diferente cantidad con el objeto de crear discordia y conflictividad entre los afectados¹⁸⁰.

La multinacional también ha realizado en todos sus proyectos la Consulta que establece el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales número 169 de la OIT (ratificado por Colombia en 1991 y por Chile en 2008¹⁸¹). Sin embargo esta consulta ha estado rodeada de polémica y en ocasiones ha sido objeto de proceso judicial¹⁸². El artículo 10 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas establece el derecho a no ser desplazados por la fuerza de sus tierras sin su previo consentimiento libre e informado, y el artículo 32.2 de la misma establece la obligación a obtener el consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras y otros recursos, entre ellos, los hídricos. La misma actuación prevé las Directrices voluntarias de la FAO. En cuanto a la normativa y directrices internas de la empresa, parece relevante mencionar la transparencia, la ética y la política de cero tolerancia contra la corrupción, especialmente teniendo en cuenta las múltiples denuncias de las comunidades frente las supuestas cooptaciones de los

¹⁷⁷ Ibíd., p. 92.

¹⁷⁸ ROJAS, J.F., (2015), *Hidroeléctrica el Quimbo al fin generará desde julio*, elColombiano, recuperado de <http://www.elcolombiano.com/hidroelectrica-el-quimbo-al-fin-generara-desde-julio-DF1117612>

¹⁷⁹ CASTRO, N., (2014), *Indígenas contra Endesa: "No queremos más represas en la zona"*, eldiario.es, recuperado de http://www.eldiario.es/desalambre/represas-Endesa-conflictos-America-Latina_0_237626997.html

¹⁸⁰ Ibíd., recuperado de http://www.eldiario.es/desalambre/represas-Endesa-conflictos-America-Latina_0_237626997.html

¹⁸¹ ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, *Ratificación del C169-Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989*, recuperado de http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312314

¹⁸² OBSERVATORIO LATINOAMERICANO DE CONFLICTOS AMBIENTALES (2014), *Chile. Comunidades plantean su total rechazo...*, cit., recuperado de <http://olca.cl/articulo/nota.php?id=104756>

líderes locales y estatales, así como de sobornos y hostigamientos¹⁸³. Por otra parte, tal y como establece el artículo 19.24 de la Constitución chilena, solo es posible la expropiación mediante ley general o especial, siempre que sea por causa de utilidad pública o de interés nacional¹⁸⁴. Y tal y como se menciona en el artículo 58 de la Constitución colombiana, también será únicamente posible la expropiación con fines de utilidad pública o interés social, consultando los intereses de la comunidad y de los afectados¹⁸⁵.

Frente a todas estas actuaciones, los movimientos colectivos han creado diversas asociaciones para combatir las vulneraciones sobre sus derechos. En Colombia, por ejemplo, se creó el Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna, con el objeto de defender la tierra, la vida y la cultura de las comunidades frente a las medidas económicas establecidas por el gobierno y por las multinacionales¹⁸⁶. Esta organización se ha centrado principalmente en la producción energética y en el derecho al agua. Otra de las organizaciones creadas ha sido la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico de El Quimbo (ASOQUIMBO), con el objeto de frenar la construcción de la central hidroeléctrica de El Quimbo.

V. REFLEXIONES FINALES

La tierra, y el territorio, es contemplada desde perspectivas diferentes. Así, para algunos actores, especialmente para las multinacionales e inversionistas privados, es simplemente un activo productivo, objeto de comercialización y explotación para la mera producción y obtención de beneficios económicos. Para otros, las comunidades rurales, la tierra significa mucho más. Proporciona un medio de vida autosuficiente, alimentos, forraje, hierbas medicinales, madera así como materiales para construir techos y cercas¹⁸⁷. Provee al ganado de pasto y alimentos, y suministra agua, esencial para la vida. La tierra es considerada también como un espacio para la práctica de las ceremonias culturales, ancestrales y espirituales que forman parte de la identidad

¹⁸³ COORDINACIÓN POR LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, *Neltume: megaproyecto hidroeléctrico de Endesa...*, cit., recuperado de <http://www.codpi.org/observatorio/122-neltume-megaproyecto-hidroelectrico-de-endesa-amenaza-el-territorio-mapuche>

¹⁸⁴ Artículo 19.24 de la Constitución Política de la República de Chile, recuperado de http://www.oas.org/dil/esp/constitucion_chile.pdf

¹⁸⁵ Artículo 58 de la Constitución Política de Colombia de 1991, recuperado de <http://pdpa.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/colombia91.pdf>

¹⁸⁶ CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA JUSTICIA SOCIAL TIERRA DIGNA, *¿Quiénes somos?*, recuperado de <http://www.tierradigna.org/index.php/quienes-somos>

¹⁸⁷ ZAGEMA, B., Informe *Tierra y poder. El creciente...*, cit., p. 11.

de sus habitantes¹⁸⁸. Sin embargo, esta forma de vida se ve cada vez más amenazada como consecuencia del arrendamiento y la compra indiscriminada de tierras, que conlleva en muchas ocasiones el desalojo forzoso de las comunidades y la vulneración, en consecuencia, de derechos humanos. En definitiva, se produce lo que se considera acaparamiento de tierras.

Los derechos humanos principales que se ven afectados están reflejados, desde la Carta de las Naciones Unidas que alude al compromiso de los Estados de promover condiciones económicas, sociales, culturales, de desarrollo y de vida favorables, así como de respetar los derechos humanos (artículos 55 y 56), a la Declaración Universal de Derechos Humanos que proclama el derecho a la vida, la libertad y la seguridad (artículo 3), la prohibición de tratos crueles y degradantes (artículo 5), el derecho a la propiedad y la prohibición de la privación arbitraria de la misma (artículo 17), y el derecho a una vida digna, especialmente el derecho a la alimentación y a la vivienda (artículo 25).

También son numerosas las directrices y declaraciones que amparan el derecho a la tierra así como los derechos de las minorías étnicas y las comunidades indígenas, cuyos derechos de propiedad pocas veces suelen estar reconocidos legalmente, aunque sí consuetudinariamente. Así, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, tal y como establece el artículo 43, desarrolla preceptos considerados como las "*normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo*". Cabe destacar los preceptos relativos al derecho de estos pueblos a la vida, integridad física y mental, libertad y seguridad personal y como colectivo (artículo 7), al derecho a no ser privados de su integridad cultural, y a la obligación de los Estados de prevenir o resarcir los actos que tengan por objeto la desposesión de sus tierras y recursos (artículo 8), al derecho a no ser desplazados forzosamente de sus territorios sin su consentimiento previo, libre e informado (artículo 10), al derecho a las tierras y territorios que tradicionalmente han poseído, en razón de su propiedad tradicional o cualquier otro tipo de ocupación, utilización o adquisición (artículo 26), y al derecho de consulta previa, libre e informada antes de aprobar proyectos que afecten a sus tierras y recursos, especialmente hídricos y minerales (artículo 32.2).

De la misma manera, las Directrices voluntarias de la FAO sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, tienen como objeto mejorar dicha gobernanza

¹⁸⁸ *Ibíd.*, p. 11.

mediante una serie de principios rectores entre los cuales destaca el deber de los Estados de dar reconocimiento y respetar a todos los titulares legítimos y sus derechos de tenencia, hayan sido registrados oficialmente o no; abstenerse de vulnerar los derechos de tenencia de otros, y cumplir con los deberes que derivan de tales derechos (artículo 3.1), el deber de los actores no estatales de respetar los derechos humanos y los derechos legítimos de tenencia (artículo 3.2), y el deber de los Estados y de los actores no estatales de impedir la corrupción con respecto a los derechos de tenencia, mediante la consulta y la participación, el imperio de la ley, la transparencia y la rendición de cuentas (artículo 6.9).

De manera más profunda se encuentran, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, con mayor extensión, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las Obligaciones Extraterritoriales de los Estados (en adelante ETO). Del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se extrae, esencialmente, la necesidad de los Estados de respetar, garantizar, promover y proteger, los derechos de los pueblos tanto económicos, como sociales y culturales, así como la prohibición de injerir de cualquier manera en ellos.

Esta necesidad de regulación es consecuencia del proceso de internacionalización que se ha desarrollado en las últimas décadas. Los Estados no solo deben respetar los derechos humanos dentro de sus fronteras, sino también fuera de ellas. Asimismo, deben regular las actuaciones de sus empresas nacionales fuera de su territorio, con el objeto de asegurar el no menoscabo de los derechos económicos, sociales y culturales¹⁸⁹. Estas obligaciones no constituyen un nuevo entramado legislativo. Son, más bien, una aclaración de las obligaciones extraterritoriales de los Estados, extraídos del conjunto de la legislación vigente¹⁹⁰.

Las ETO vienen recogidas en los Principios de Maastricht Sobre las Obligaciones Extraterritoriales de los Estados en el Área de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Según el preámbulo del texto legislativo, estos Principios aspiran a *"aclarar el contenido de las obligaciones extraterritoriales de los Estados de realizar los derechos económicos, sociales y culturales con el fin de promover y dar pleno efecto a los fines de la Carta de las Naciones Unidas y los derechos humanos*

¹⁸⁹ Artículo 24 de los Principios de Maastricht sobre las Obligaciones Extraterritoriales de los Estados en el Área de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

¹⁹⁰ Introducción de los Principios de Maastricht sobre las Obligaciones Extraterritoriales de los Estados en el Área de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

*internacionales*¹⁹¹. El artículo 8 establece qué se entienden por obligaciones extraterritoriales. Por un lado, son *"las obligaciones relativas a las acciones u omisiones de un Estado, llevadas a cabo dentro o fuera de su propio territorio, que afecten el disfrute de los derechos humanos fuera de su territorio"*¹⁹² y, por otro lado, también se refieren a *"obligaciones de carácter global establecidas en la Carta de las Naciones Unidas y en instrumentos de derechos humanos que requieran la adopción de medidas, por separado y conjuntamente mediante la cooperación internacional, para realizar los derechos humanos de manera universal"*¹⁹³. Además de alcanzar a las actuaciones de los Estados, los siete Principios plasmados en el texto afectan también a los actores no estatales (empresas, transnacionales, inversores privados, sobre todo) que actúen por instrucciones o bajo la dirección o el control del Estado en cuestión, o que estén facultadas por el mismo para ejercer atribuciones del poder público, cuyo Estado de origen será responsable de los actos u omisiones de los mismos¹⁹⁴.

Una vez plasmados los principios generales y su alcance, los Principios de Maastricht se enfocan en las obligaciones de los Estados, que se resumen en los siguientes puntos: Respetar, Proteger, Cumplir, Rendir cuentas y Proporcionar recursos efectivos (vías de reparación)¹⁹⁵. En el mismo contexto, la ONU ha elaborado recientemente los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, de los que ya se ha tratado anteriormente. Así, la necesidad de los Estados y de los actores no estatales de garantizar los derechos humanos y, especialmente, los derechos económicos, sociales y culturales más allá de sus propias fronteras, adquiere especial relevancia en aquellos territorios donde los intereses económicos privados parecen estar por encima de los derechos humanos.

El Estado español se ha comprometido en numerosas ocasiones a garantizar los derechos económicos, sociales y culturales¹⁹⁶. Este dato adquiere relevancia dada la magnitud de las inversiones que realiza Estado español en el extranjero. Según los datos, España es el undécimo inversor en el mundo, y el tercer inversor en América

¹⁹¹ Preámbulo de los Principios de Maastricht sobre las Obligaciones Extraterritoriales de los Estados en el Área de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

¹⁹² Artículo 8 a) de los Principios de Maastricht sobre las Obligaciones Extraterritoriales de los Estados en el Área de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

¹⁹³ Artículo 8 b) de los Principios de Maastricht sobre las Obligaciones Extraterritoriales de los Estados en el Área de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

¹⁹⁴ Artículo 12 de los Principios de Maastricht sobre las Obligaciones Extraterritoriales de los Estados en el Área de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

¹⁹⁵ ZAMORA, F.J., «Acaparamiento de tierras...», cit., pp. 14-17.

¹⁹⁶ VETERINARIOS SIN FRONTERAS, Informe *¿El derecho a la alimentación es una responsabilidad empresarial...?*, cit.

del Sur¹⁹⁷. De esta manera, puede considerarse que es una gran oportunidad para el Estado llevar a cabo un proceso de internacionalización positiva, mediante la adecuación de sus actuaciones a la normativa internacional que establece la responsabilidad y las obligaciones de los actores estatales y no estatales frente a los derechos humanos, con el objetivo de crear un impacto positivo en el desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales en los países donde invierten¹⁹⁸.

La normativa que se ha ido creando en los últimos años invocando la responsabilidad de los Estados y de las empresas en sus inversiones extranjeras ha sido, básicamente, una lucha por defender los derechos humanos ante el proceso de globalización, en el que en muchas ocasiones parece tener más importancia la obtención de beneficios privados o para un país determinado que para la globalidad de las personas. Además, *"no puede ser que los Estados queden maniatados cuando detectan graves afectaciones de los derechos humanos y quieran salir a su paso; tampoco que las citadas instituciones [BM, etc.] provean a la financiación de proyectos con notorias posibilidades de impactar en tales derechos"*¹⁹⁹. También ha significado un intento de frenar las vulneraciones que pudieran producirse en los países objeto de inversiones, pues estas, en muchos casos favorecidas por el propio Estado en el que se invierte, pueden vulnerar los derechos humanos y las libertades fundamentales, especialmente de las comunidades rurales, minorías étnicas y pueblos indígenas. Así, la compra y el arrendamiento de grandes porciones de tierra, sin transparencia, sin un proceso de consulta previa, y sin prever ni evitar las repercusiones negativas que pueden conllevar, es una forma de vulnerar estos derechos, y conlleva pobreza, hambre y muerte para la población afectada.

Gracias a los movimientos sociales y a la concienciación de los organismos internacionales, en los últimos años están dándose lugar casos en los que *"se ha conseguido una solución adecuada, o los problemas se hallan en vías de ser solventados o, al menos, se han logrado paralizar los acaparamientos de tierra"*²⁰⁰. Además, se ha ido elaborando un entramado de directrices, principios, pactos y declaraciones cuyo objetivo ha sido, por un lado, reconocer los derechos de las personas y comunidades a la tierra, a sus recursos naturales, a sus modos de vida y a sus culturas; por otro lado, la obligación de los Estados de proteger y amparar estos derechos y de resarcir su vulneración y, por último, establecer un marco de

¹⁹⁷ SAN PEDRO, P. «La empresa española y los derechos humanos...», cit., p. 12.

¹⁹⁸ SAN PEDRO, P. «La empresa española y los derechos humanos...», cit., p. 13.

¹⁹⁹ ZAMORA, F.J., «Desarrollo sostenible y empresas...», cit., p. 21.

²⁰⁰ *Ibíd.*, p. 14.

obligaciones y de responsabilidad de los Estados y actores no estatales en el ejercicio de sus actividades económicas, frente a los derechos humanos. Sin embargo, no basta con la elaboración de todas estas normas, sino que es necesaria una verdadera aplicación de las mismas, así como la adopción de las medidas necesarias para que las empresas y demás actores no estatales nacionales respeten los derechos humanos fuera de su territorio nacional, y un verdadero procedimiento efectivo de rendición de cuentas en caso de vulneraciones. Pero, más importante, todo lo anterior no tiene sentido sin una verdadera concienciación de los Estados, actores no estatales y sociedad, sobre el respeto a los derechos humanos y sobre las repercusiones que sus actos pueden tener en la vida de miles de personas.

VI. CONCLUSIONES

- I. El acaparamiento de tierras es un fenómeno que se puede describir como la adquisición o el arrendamiento de tierras por inversores con el objetivo de producir y exportar principalmente alimentos y combustibles, pero también para la construcción de obra pública y para la utilización en el sector turístico. El proceso se caracteriza por un bajo nivel de transparencia, la vulneración del consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas y la ignorancia de las repercusiones económicas y sociales en el territorio objeto de la inversión.
- II. Las causas de este fenómeno han sido principalmente: la inseguridad alimentaria, la volatilidad de los precios, la seguridad energética, los fines de protección del medio natural, la creación de zonas económicas especiales para poner en valor zonas sin producción, la creación de instrumentos financieros para reducir los riesgos del mercado y obtener beneficios relacionados con la preocupación por el abastecimiento alimentario, y el conjunto de normas, reglamentos e incentivos que facilitan este fenómeno.
- III. Los principales actores del acaparamiento de tierras son las empresas privadas, pero también las fundaciones inversoras y los Estados a través de empresas de su propiedad. Los países objeto de las inversiones son principalmente países en desarrollo ubicados en África, América Latina y Asia.
- IV. Las inversiones negativas son aquellas que no impulsan el desarrollo económico, social y ambiental de las comunidades locales afectadas, sino que producen todo lo contrario. Este tipo de inversiones responden a la postura política y económica de quienes fomentan los acuerdos sobre tierras y están apoyadas por los principales actores del acaparamiento de tierras antes mencionados.

- V. Las inversiones positivas son aquellas que generan crecimiento económico, protección ambiental y reducción de la pobreza. Este tipo de inversiones responden a la postura política y económica de quienes defienden que el acaparamiento de tierras es inevitable y su objetivo es regularlo para mitigar los impactos negativos y maximizar los beneficios y las oportunidades de las comunidades locales afectadas. Están defendidas por organizaciones como la FAO, en el seno de las Naciones Unidas.
- VI. El marco regulatorio internacional actual se centra en el fomento de las inversiones positivas. Tienen como objetivo principal el respeto de los derechos humanos, en especial de los derechos a la tenencia de la tierra y el territorio.
- VII. Las empresas españolas nunca se han caracterizado por acaparar tierras. Sin embargo, en los últimos años, y debido al proceso de internacionalización, se han comenzado a encontrar algunos casos. Como consecuencia se ha abierto un debate sobre la necesidad de regulación en el plano del Estado español.
- VIII. Los derechos humanos afectados se encuentran en tratados como la Carta de las Naciones Unidas y la Carta Universal de Derechos Humanos. También en declaraciones como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, y en directrices como las Directrices voluntarias de la FAO sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional.
- IX. De manera más profunda se encuentran, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, con mayor extensión, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las Obligaciones Extraterritoriales de los Estados. Las ETO vienen recogidas expresamente en los Principios de Maastricht Sobre las Obligaciones Extraterritoriales de los Estados en el Área de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en las que se enumeran las obligaciones de los Estados de respetar, proteger, cumplir los derechos humanos y de rendir cuentas por los actos u omisiones del mismo, fuera y dentro de su territorio.
- X. Gran parte del marco normativo actual, tal y como se ha reflejado, posee un carácter voluntario. Otra gran cantidad solo es vinculante para los Estados si se ratifican. Es necesario, pues, un mayor compromiso por parte de los Estados de ratificar o seguir las recomendaciones internacionales en esta materia, así como de dictar normativa nacional o incorporar las internacionales ya existentes en aras a una regulación efectiva que ampare los derechos humanos en el propio territorio y fuera de él.

VII. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

- ÁLVARO, C., (2015), *Iberdrola, Gamesa y Acciona dan las alas a la eólica*, Capital Madrid, recuperado de <https://www.capitalmadrid.com/2015/1/28/36870/iberdrola-gamesa-y-acciona-dan-a-las-a-la-eolica.html>
- ASAMBLEA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO (APIITDTT) (2014), *Asunto: Resolución sobre la situación legal de la defensora Lucila Bettina Cruz Velázquez*, recuperado de <https://tierrayterritorio.wordpress.com/2014/08/28/asunto-resolucion-sobre-la-situacion-legal-de-la-defensora-lucila-bettina-cruz-velazquez/>
- BANCO MUNDIAL (2014), *Comunicado de prensa. El Banco Mundial inicia las deliberaciones sobre la propuesta para fortalecer las salvaguardas sociales y ambientales*, recuperado de <http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2014/07/30/world-bank-begin-discussions-proposal-strengthen-social-environmental-safeguards>
- BELLANI, O., (2013), *El pueblo contra el Quimbo*, Otramérica, recuperado de <http://otramerica.com/radar/el-pueblo-contra-quimbo-o-las-heridas-modelo-extractivo-colombia/2860>
- BOIX, V., *Piratas y pateras: el acaparamiento de tierras en África*, Icaria Editorial, S.A., Barcelona, 2012.
- BORRÁS, S. y FRANCO, J., «Global land grabbing and trajectories of agrarian change: a preliminary analysis», *Journal of Agrarian Change* núm. 12, 2012, pp.34-59.
- BORRÁS, S., FRANCO, J., y WANG, C., «Land & Sovereignty in the Americas. Governing the Global Land Grab: Competing political tendencies», *Food First* núm. 2, 2013.
- BORRÁS, S., FRANCO, J., y WANG, C., Documento de debate *Tendencias políticas en disputa para la gobernanza global del acaparamiento de tierras*, Transnational Institute (TNI), 2012.
- CARBON TRADE WATCH, Hoja Informativa 2, *Compensaciones de carbono*, 2009.
- CASTRO, N., (2014), *Indígenas contra Endesa: "No queremos más represas en la zona"*, eldiario.es, recuperado de http://www.eldiario.es/desalambre/represas-Endesa-conflictos-America-Latina_0_237626997.html
- CLAVERO, B., *Consulta y consentimiento previo, libre e informado a la luz de del derecho internacional de los derechos humanos*, recuperado de http://www.redunitas.org/Consulta_BC.pdf

- CLAVO, E., (2012), *Un cordón militar protege en Marruecos a las empresa española de arroz La Cigala*, recuperado de <http://www.elmundo.es/elmundo/2012/06/18/espana/1340033578.html>
- CLAVO, E., (2012), *"No hay arroz para todos"*, recuperado de <http://www.elmundo.es/elmundo/2012/06/23/internacional/1340453891.html>
- COMUNICARSE (COMUNICACIÓN DE RESPONSABILIDAD & SUSTENTABILIDAD EMPRESARIA) (2014), *Renovalia y Ebro Foods responden a los cuestionamientos de Intermón Oxfam por sus operaciones en México*, recuperado de <http://comunicarseweb.com.ar/?Renovalia+y+Ebro+Foods+responden+a+los+cuestionamientos+de+Intermon+Oxfam+por+sus+operaciones+en+M%E9xico&page=ampliada&id=11938>
- Constitución Política de la República de Chile, recuperado de http://www.oas.org/dil/esp/constitucion_chile.pdf
- Constitución Política de Colombia de 1991, recuperado de <http://pdpa.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/colombia91.pdf>
- COORDINACIÓN POR LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, *Neltume: megaproyecto hidroeléctrico de Endesa amenaza el territorio Mapuche*, recuperado de <http://www.codpi.org/observatorio/122-neltume-megaproyecto-hidroelectrico-de-endesa-amenaza-el-territorio-mapuche>
- DE SCHUTTER, O., «How not to think of land-grabbing: three critiques of large-scale investments in farmland», *The Journal of Peasant Studies* núm. 38 ,2011, pp. 249-279.
- DEL VISO, N., «Los nuevos amos de la tierra: acaparamiento de tierras y neoliberalismo», Fuhem Ecosocial, 2013.
- Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques (2012).
- EBRO FOODS, *Informe de respuesta al documento de Intermón: "La inversión de Ebro Foods en Marruecos"*, Ebro Foods, Madrid, 2013.
- FLEURKE, F., (2014), *A brief Introduction to the Phenomenon of Land Grabbing*, recuperado de <http://www.nvvn.nl/artikel/a-brief-introduction-to-the-phenomenon-of-land-grabbing/>
- FRIENDS OF EARTH EUROPE, *Informe África, el acaparamiento de tierras: Un estudio sobre el alcance y el impacto de los acaparamientos de tierras para agrocombustibles*, 2010.
- FUHEM ECOSOCIAL, *Informe El acaparamiento global de tierras. Guía básica*, Programa de Justicia Agraria de TNI, Madrid, 2013.

- GARZÓN, A., (2013), *Aníbal Garzón Baeza entrevista a Luismi Uharte. Las multinacionales como Iberdrola son las instituciones dominantes en el capitalismo actual*, recuperado de <http://omal.info/spip.php?article4873>
- GEARY, K., Nota informativa *Nuestra tierra, nuestras vidas*, Oxfam Internacional, 2012.
- GONZÁLEZ, J., (2015), *De la rebeldía a la autonomía: pueblos del Istmo de Tehuantepec luchan contra Trasnacionales y Gobierno*, Proyecto Ambulante, recuperado de <http://www.proyectoambulante.org/index.php/noticias/oaxaca/item/5779-de-la-rebeldia-a-la-autonomia-pueblos-del-istmo-de-tehuantepec-luchan-contr-trasnacionales-y-gobierno>
- GRAIN, (2012), *Acaparamiento de tierras. Un lado oscuro de la inversión financiera*, Observatorio de Multinacionales en América Latina, recuperado de <http://omal.info/spip.php?article2585>
- GRUPO DE EXPERTOS DE ALTO NIVEL SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN, Informe *Volatilidad de los precios y seguridad alimentaria*, Informe HLPE Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, Roma, 2011.
- HERNÁNDEZ, J., Y RAMIRO, P., (2015), *¿Qué fue del Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos?*, lamarea, recuperado de <http://www.lamarea.com/2015/02/20/que-fue-del-plan-nacional-sobre-empresas-y-derechos-humanos/>
- INTERNATIONAL SERVICE FOR HUMAN RIGHTS (ISHR), *México: Juzgado retira cargos penales infundados contra Bettina Cruz Velázquez*, recuperado de <http://www.ishr.ch/news/mexico-juzgado-retira-cargos-penales-infundados-contr-bettina-cruz-velazquez>
- MACKAY, F., (2004), *El Derecho de los Pueblos Indígenas al Consentimiento Libre, Previo en Informado y la Revisión de las Industrias Extractivas del Banco Mundial*, Forest People Programme, recuperado de <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/10/eiripsfpicjun04sp.pdf>
- MARGULIS, M., MCKEON, N. y BORRÁS, S., «Land Grabbing and Global Governance: Critical Perspectives», *Globalizations* núm. 10, 2013, pp. 1-23.
- MARKS, D., SIRITHET, A., RAKYUTTITHAM, A., WULANDARI, S., CHOMCHAN, S., *Land Grabbing and Impacts to Small Scale Farmers in Southeast Asia Sub-Region, Local Act Thailand*, recuperado de http://www.iss.nl/fileadmin/ASSETS/iss/Research_and_projects/Research_networks/LDPI/CMCP_60-Samranjit.pdf

- NACIONES UNIDAS, OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS, *Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos*, Nueva York y Ginebra, 2011.
- NAMUNCURA, D., *Ralco: ¿represa o pobreza?*, Colección Sin Norte, Santiago de Chile, 1999.
- OBSERVATORIO LATINOAMERICANO DE CONFLICTOS AMBIENTALES (2015), *Chile. Amenazas hidroeléctricas en la Araucanía: transnacional Endesa acapara aguas en Curacautín*, recuperado de <http://olca.cl/articulo/nota.php?id=105071>
- OBSERVATORIO LATINOAMERICANO DE CONFLICTOS AMBIENTALES (2014), *Chile. Comunidades plantean su total rechazo a Consulta indígena por la Central Neltume de Endesa Enel*, recuperado de <http://olca.cl/articulo/nota.php?id=104756>
- OBSERVATORIO LATINOAMERICANO DE CONFLICTOS AMBIENTALES (2014), *Chile. Mapuches recurren de protección contra consulta indígena de hidroeléctrica Neltume de Endesa*, recuperado de <http://olca.cl/articulo/nota.php?id=104169>
- OLIVIER DE SCHUTTER, *Producción, recursos. Derechos sobre la tierra*, recuperado de <http://www.srfood.org/es/derechos-sobre-la-tierra>
- PULIDO, A., *Susurros del Magdalena. Los impactos de los megaproyectos en el desplazamiento forzado*, Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi, Bilbao, 2014.
- Principios de Maastricht sobre las Obligaciones Extraterritoriales de los Estados en el Área de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
- Principios para la Inversión Responsable en Agricultura y los Sistemas Alimentarios (2014)
- ROJAS, J.F., (2015), *Hidroeléctrica el Quimbo al fin generará desde julio*, elColombiano, recuperado de <http://www.elcolombiano.com/hidroelectrica-el-quimbo-al-fin-generara-desde-julio-DF1117612>
- ROJAS, R., (2014), *Muerto, proyecto eólico en San Dionisio, Oaxaca*, Sociedad y Justicia, recuperado de <http://www.jornada.unam.mx/2014/01/09/sociedad/035n1soc>
- SAAVERDA, M., *Economía de Chile. Código de Aguas chileno y reforma 2005: los problemas con la asignación inicial en la Araucanía*, Observatorio De La Economía Latinoamericana, recuperado de <http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/cl/2008/msb.htm>
- SAN PEDRO, P., «La empresa española y los derechos humanos. Claves para una internacionalización responsable» núm 34, *Intermón OXFAM*, 2013.

- SISCAR, M., (2010), *Lo que la energía eólica española se llevó*, Observatorio de Multinacionales en América Latina, recuperado de <http://omal.info/spip.php?article1552>
- UHARTE, L.M., «Las multinacionales en el siglo XXI: impactos múltiples: El caso de Iberdrola en México y en Brasil», 2015 y más núm. 4, 2012.
- ZAMORA, F.J., «Acaparamiento de tierras (land grabbing) y empresas multinacionales: el caso Mubende-Neumann», *Proyecto Consolider-Ingenio 2010, HURI-AGE, Papeles el tiempo de los derechos*, num.5, 2013.
- ZAMORA, F.J., «Desarrollo sostenible y empresas multinacionales: un estudio sobre los acaparamientos de tierra (land grabbings) en clave de responsabilidad» *Proyecto Consolider-Ingenio 2010, HURI-AGE, Papeles el tiempo de los derechos*, núm. 4, 2015.
- <http://www.ebrofoods.es/>
- <http://www.sepi.es/>
- <https://www.unglobalcompact.org/>
- <http://www.observatoriorsc.org/>
- <http://www.iberdrola.es/inicio>
- <http://www.pozol.org/>
- <http://www.amdee.org/>
- <http://www.endesa.com/es/home>
- <http://www.endesa.cl/es/Paginas/home.aspx>
- <http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm>
- <http://www.tierradigna.org/>

VIII. LAND GRABBING, SPANISH COMPANIES AND HUMAN RIGHTS

In the current context of limited resources, climate change and globalization process, the number of stakeholders who carry out agreements of land transactions in order to ensure its resources in response to the needs of an ever growing population has increased. These land transactions involve an agreement between the host country and the investors through which lands are rented (usually for a 99-year term) or purchased with the principal aim of producing and exporting food and fuels. Although these transactions are not only made with agri-food and extractive purposes but also for the construction of public works or even with touristic purposes.

Land grabbing is a very old phenomenon which goes way back to the era of colonialism and imperialism, but with some differences. Before, the stakeholders making land grabbing were states, now, the vast majority are companies. In recent years, especially since the food crisis of 2007 and 2008, the number of land grabs has increased rapidly, although it is not currently possible to know the real number of hoarded land due to three factors: the unreliability in data collection, abrupt changes of financing and the different stages of development in which the project can be found. The main feature of land grabbing is that it is taking place in lands considered empty or marginal, but that in reality are occupied by people and local communities. As a result, the purchase or lease of these occupied lands involves the forced displacement of the population from their lands. Often these displacements are made with violence. At other times, transactions occur on lands where the peasant population cultivates their own food to survive, so many of them end up working for the investment company or choose to leave the territory instead to look for another place to survive. The immediate result is the increase of poverty.

This type of land transactions are facilitated by a certain number of aspects. First, because the agreements between the host country and the investor are often speculative and dark, and often have a lack of prior consultation of the affected population. Second, by the corruption of the host countries. Third, by the lack of titles of land ownership proving that the population inhabiting the land for generations really owns it. This is because in most of the host countries, the private property does not exist as such, but the lands are considered communal. In this regard, it can be said that land deals became the phenomenon known as land grabbing when they were being carried out violating human rights, infringing the principle of free, prior and informed

consent of the affected communities and ignoring social, economic and environmental impacts of the transaction as well as the investment.

The most relevant causes which have promoted the increment of land grabbing have been mainly food insecurity and price volatility, both related to the increase of world population and food scarcity. This situation has led to the lease and purchase of land for the production and export of food. In respect of food insecurity, it is due to the fear of governments and companies to be unable to meet all the food demand of its population. In respect of price volatility, it must be said that those with more money are considered indifferent to the volatility of food prices than those that have a lack of financial resources, therefore, in developed countries the demand for products is usually the same regardless of the rise or fall in prices. Thus, population growth is causing that the demand rises more and more, and as a result, it produces a food shortage. The same can be said about fuel demand.

Other causes have influenced in this growth like, largely, energy security, which has led to the purchase of lands for the extraction of raw materials, fuels and the construction of infrastructures such as hydroelectric or wind power to create energy. The extractive sector, for some time now, is causing the greatest damages to human rights. To a lesser extent, we find environmental protection, called green hoarding, which involves the appropriation of land and resources for environmental purposes in the name of sustainability and conservation, but produces negative social and ecological effects; the creation of special economic zones to value non-production areas aiming to encourage economic growth in emerging countries; the creation of new financial instruments to reduce market risk and to obtain benefits and the rules, such as exemptions, tax holidays or subsidies; and regulations and incentives provided by the international community to facilitate the phenomenon.

Private companies, foundations and the investing States (typically through their own companies) are the main actors of land grabbing. These stakeholders form an oligopoly and invest in developing countries imposing their prices and market conditions to obtain the greatest possible benefits. Investments have a key role in the process of land grabbing, as they are linked to the living conditions of the communities affected by them. The respect or violation of human rights and the economic, social and environmental development or damage will depend on how the investment is made in the host country. Thus, an investment, commonly called positive, is defended and that investment produces an economic, social and environmental development, and

consequently a reduction in long-term poverty. Such investments are caused by the opinion that land grabbing is inevitable and therefore must be regulated to mitigate the negative impacts and maximize opportunities. It is defended by organizations such as the Food and Agriculture Organization of the United Nations, that has approved the Voluntary Guidelines on Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests, or the Committee on World Food Security, that has approved the Principles for Responsible Investment in Agriculture and Food Systems. From the business sector, the adherence to the Global Compact and the practice of Corporate Social Responsibility is promoted. The Global Compact is an initiative of the United Nations that aims to adapt the activities, strategies and policies of the company to the ten principles laid down in human rights, environment and corruption. Corporate Social Responsibility, which is voluntary, is based on companies having to perform their activities taking into account not only their own benefits but also their customers', employees', local communities' and the environment's benefits.

In opposition to this, another investment, called negative, that considers land as a financial asset is also defended. Therefore, the implications on the lives of the affected communities and of the environment are not taken into account, and they involve the use of cheap labor, the violation of international labor standards, the depletion of water resources and soil, and the provocation of very changeable weather patterns. These investments are supported on global development and the modernization of developing countries, and they are defended by the companies, the vast majority of governments and international institutions like the World Bank. It is also important to note that many of the host countries facilitate this type of investment because they think they can be beneficial for them, or because of reprehensible reasons, such as obtaining benefits for their own purposes. The last type of investment is the one that aims to redefine the investments in land with investments, mainly carried out by the State itself or by smallholders and farmers, in order to stop land grabbing. This sector is defended by social movements, organizations and associations.

Currently, the new international regulatory framework on investment aims to promote the positive ones and slow down the negative ones. Thus, a regulation based on the responsibility of states and companies in front of human rights is being created. According to this regulation, in the exercise of their activities, the states and companies must be engaged with the protection and the respect of human rights. For that, two procedures are established to follow: the free, prior and informed consent of the communities affected by investments in accordance with the ILO convention no. 169 on

indigenous and tribal peoples, and transparency in each of the business actions that companies develop. In this context, the UN has recently developed the Guiding Principles on Business and Human Rights.

There are hundreds of documented cases of trade agreements made in recent years in which land grabbing occurs. Investments by Spanish companies are not characterized by land grabbing. However, during the last years, the number of cases of this phenomenon has increased. One of the main reasons has been globalization. In the present work, three cases of Spanish companies that are allegedly related to land grabbing have been investigated. Information has been collected from organizations, NGOs and associations defenders of land, rural and indigenous communities and human rights, means of communications, publications and works that are part of researches.

The first of these cases is centered on the multinational company Ebro Foods, a world leader in the rice industry. Among its shareholders, it is found the Spanish government. Ebro Foods is part of the Global Compact, it presents Codes of Conduct and it integrates the Corporate Social Responsibility into its business activities. The subsidiary of the multinational, Mundiriz, came to Chihate (in the region of Larache, Morocco) in the late nineties, where it began planting activities and exporting rice, occupying about 2,780 hectares in the region of Larache. The conflict began years later, in 2012, when the company began to sow the land surrounding the town of Chihate. These lands were used for farming and grazing cattle population and therefore were the only source of income and means of subsistence of the population.

The population protested, demanding the return of their expropriated land, more jobs and the settlement of the problem that caused mosquitoes being attracted by the plantation. Also they demanded a solution to water poisoning by the use of fertilizers that had made its consumption impossible. As a reaction to the proposals, the Moroccan government deployed about 2000 soldiers using, according to sources, excessive measures, such as tear gas, rubber bullets and two helicopters. As a result many of the protesters were injured, others were arrested, and others hid in the surrounding woods. Weeks after the start of the conflict, the Moroccan army evicted the population to ensure rice planting. This action was denounced by the Moroccan Association for Human Rights.

The association Veterinarios Sin Fronteras developed a report of the events, accusing the company of making bad practices and of not acting according to the established

admissions instruments. The Intermón Oxfam association developed another about Spanish companies and human rights, which mentioned as an example Ebro Foods, like a company that didn't respect the free, prior and informed consent of the communities and didn't invest in the communities where it operated. Ebro Foods responded with another report which alleged the lack of veracity, the poor objectivity of the report and the issuance of numerous judgments. To date, the result of rice cultivation in Chlihate by the rice company has been poverty, hunger and migration. Very few jobs have been created due to the automation of agricultural activities, salaries are minimal and the working conditions are precarious. The land that Chlihate had to farm and grazing is now virtually nonexistent.

The actions taken by this company have been provided by aid policies to the Moroccan investment, orienting the twenty percent of the fertile surface of Morocco industrial crop for export. Also, the land expropriated from the inhabitants of Chlihate was military heritage and therefore was transferred under lease to the company. This action has been contravening the provisions of the Voluntary Guidelines on Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests and the provisions of the Principles for Responsible Investment in Agriculture and Food Systems and the Global Compact. However, all these international instruments are voluntary so it does not involve any kind of international responsibility or accountability.

The second case is developed in Mexico. The Spanish company Iberdrola, whose business is production and supply of energy, is present in more than thirty countries worldwide. It is considered a leader in wind energy and one of the greatest pioneers in sustainable research. This company has a compromise to the environment and sustainable development. It also integrates in its proceedings the corporate social responsibility and sustainability policies, relations with stakeholders and respect for human rights. This company came to Mexico in the first decade of XXI century taking advantage of the economic opening of the country to foreign capital following the mass privatization and began to develop wind projects across the country, especially in the Isthmus of Tehuantepec, located in the State of Oaxaca, which is considered one of the best areas in terms of wind conditions. Iberdrola built three wind farms in this area: La Ventosa, Bi Nee Stipa and la Venta III. In the process, sources reported alleged deception for making sign their inhabitants, with the help of local authorities, very disadvantageous land leases, making promises of great economic benefits and many jobs. They also denounced the use of pressure and the use of population's ignorance of regulation. All without clear and accurate information about the consequences of the stipulated contracts and without a process of prior consultation.

As a result, and according to testimonies, the owners of the rented lands had complained about them being leased by very small amounts of money, besides that more jobs had not been created and that the ones that were created had been occupied mostly by Spanish workers. As for the living conditions of the local population, the land to cultivation and grazing was reduced; dust and changes in the soil caused by the construction of the wind farms supposed a detriment to agriculture and livestock.

All this provoked a social upheaval that was harshly repressed, according to the testimonies collected, through threats, violence and arrests. In 2011, the Indian National Congress also reported the criminalization of indigenous fighters, the dispossession of their territories and the silence and complicity of the federal government and the state of Oaxaca in front of the events. It is known, even, criminal proceedings commenced by the Attorney General of the Republic of Mexico to human rights defenders in the country, such as against a member of the National Network of Human Rights Defenders in Mexico, Lucila Bettina Cruz Velázquez, in 2012. According to the association, these processes serve as a mechanism of criminalization of social protest. Complaints have continued taking place in recent years, and today, opposition to the multinationals and protests of the population continues. However, there are currently thirty-one wind farms in operation and some new projects of wind farms have been started.

In this regard, the lack of prior, free and informed consent of affected communities in the territory of Oaxaca has resulted in the conflicts already described. This right is recognized in a wide international standards, and requires states to consult with these peoples based on special reasons pertaining only to indigenous and tribal peoples as it is linked to the right to identity and cultural integrity, the right to maintain their own institutions and customs, the right to land and resources and the right to decide their own development priorities, among others.

The last case takes place in two countries, Colombia and Chile. The Spanish company Endesa, leader in the Spanish energy sector, operates in both of them. Since 2009, Endesa is part of the Italian group Enel, which operates in more than thirty countries worldwide. Endesa has various commitments to good governance, ethical behavior, transparency and protection of the environment. It is also attached to the UN Global Compact and its ten principles. Endesa has a large number of hydropower plants in South America, especially in Chile and Colombia. In the first country, the Constitution allows the privatization of water. Its law also includes the Water Code of 1981, considered the most liberal in the world. It has generated much controversy because

supposedly it encourages hoarding. As a result, most water rights are bought by multinationals in order for them to construct hydroelectric plants. In fact, it is estimated that Enel-Endesa, together with two other companies, own the eighty percent of Chilean water resources. These facilities have caused serious damages to human rights, as it has already been observed in plants of Pangué and Ralco, which affected thousands of hectares, and flooded several indigenous communities who had to be relocated from their territories. Both projects had much opposition of society and of national institutions of some countries such as the National Commission on the Environment and the National Indigenous Development Cooperation.

Currently, the subsidiary of Endesa, Endesa Chile, has started another project in Chile on Lake Neltume. As a result there has been a strong opposition from the population that is going to be affected, as it will suppose the displacement and resettlement of these communities, as well as a great cultural and environmental loss. Although the project has been subject of consultation under the ILO convention no. 169 on indigenous and tribal peoples, indigenous people have doubted about the truth and respect for the agreement. As a consequence, various appeals against the consultation have been filed. Various organizations have also denounced cooptation of leaders, bribes and harassment of indigenous leaders. Currently, Endesa owns five water rights registrations of the Cautín River in the region of Araucanía.

In Colombia, the situation is similar. One of the last projects that has aroused controversy has been the construction of the hydroelectric plant of El Quimbo, in the Magdalena River. Since the project was proposed in 1997 it has been surrounded by controversy and non-transparent and dubious proceedings. Recently, it is causing thousands of forced displacements, often through violence, because of flood-land. This project flooded 9,000 hectares and five villages. In addition, the number of people affected recognized by the company is much less than the number defended by social organizations. The use of police shelters, undue pressures, low offsets, and threats of expropriation have been also reported. Despite the actions of some state agencies aimed at the suspension of those affected or their getting adequate compensations, based on provoking a situation of threat and violation of the right to a dignified life, food security and effective public participation, among others, the project has run its course. In response, collective movements have created various associations to oppose these projects and to combat violations of their rights.

All affected have declared a common pattern in the actions of Endesa to overcome the resistance of the affected communities based on changing firms for money as gifts, and

award them compensations of unequal amounts in order to create discord among them. The Convention No. 169 of indigenous and tribal peoples has also been done but has always been surrounded by controversy and at times has been subject to judicial process, allegedly in breach of the UN Declaration on indigenous peoples and the FAO Voluntary Guidelines. Finally, the hydroelectric plant of El Quimbo has completed its work and will start generating energy from July 2015. Faced with all these actions, collective movements have created various associations to combat violations of their rights.

As it has been shown by the exposure of the three cases, they all have common characteristics. Firstly, the three Spanish companies supposedly perform negative investments. These investments give rise, according to the associations and testimonies presented, to land grabbing situations. These situations produce serious effects on human rights, and also on the living conditions of the affected population and on the environment. Secondly, in all three cases the process of free, prior and informed consultation under ILO convention no. 169 on indigenous and tribal peoples has been non-existent (in the case of Ebro Foods and Morocco and in the case of Iberdrola and Oaxaca), or has raised great doubts among affected communities about their veracity, which has sometimes been disputed (case Oaxaca and Iberdrola and Endesa case of Chile and Colombia). Thirdly, the major consequence for the affected communities has been forced eviction, and according to the testimonies collected, the use of force has even been employed. Fourthly, in all three cases there have been, due to situations of violation of human rights, social upheavals and strong opposition to the project by the affected communities and by social organizations and associations. Finally, all the host governments of the three cases have repressed in one way or another these uprisings.

Of the cases exposed, some valuations about the conception of land can be extracted. For some, it is a productive asset like any other (as it can be seen in cases, large companies are looking at the extent possible economic profits), and for others, it is a way of life and subsistence as well as an ancient legacy, sometimes sacred (as it can be seen in the cases, affected communities have been living in these territories for generations and are their livelihood and subsistence without which they can't live). Due to land grabbing, there has been a violation of human rights and so this way of life has been threatened.

Human rights violations in land grabbing are reflected from the Charter of the United Nations (which establishes the commitment of States to promote economic, social, cultural, developmental and favorable living conditions and the respect of human rights)

to the Universal Declaration of Human Rights (which establishes the right to property and the prohibition of arbitrary deprivation of it). There are numerous guidelines and statements that also protect the right of communities to the territory, that is, what is called land rights. International community also protects rights of ethnic minorities and indigenous communities, whose property rights are customarily recognized, but rarely legally recognized.

In this context, we can find the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. The highlighted articles are the right of not being forcibly removed from their lands without their prior, free and informed consent (Article 10), the right to the lands and territories they have traditionally owned, because of their traditional ownership or any other occupation, use or purchase (Article 26), and the right to prior, free and informed consent before approving projects affecting their lands and resources, especially water and minerals (Article 32.2). One of the current guidelines with more importance at the international level is the FAO Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the context of national food security. These guidelines aim to improve such governance through a series of guiding principles, which are summarized in the duty of the state to recognize and respect the land rights (whether registered or not), and to refrain from infringe them. It establishes the duty of non-state actors to respect human rights and legitimate tenure rights and it also emphasizes the need for consultation and participation of the affected population.

The Extraterritorial Obligations of States are also found in the International Covenant on Civil and Political Rights and, more extensively, in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. States should not only respect human rights within its borders but also beyond. They should regulate the actions of their national companies outside its territory in order not to violate the economic, social and cultural rights. The Extraterritorial Obligations of States are contained in the Maastricht principles on extraterritorial obligations of States in the Area of Economic, Social and Cultural Rights. The Extraterritorial Obligations of States are the obligations relating to the actions or omissions of a State held within or outside their own territory that affect the enjoyment of human rights outside its territory. These principles affect the states and the non-state actors (companies, corporations, private investors), acting on the instructions or under the direction or control of the State concerned, or empowered by it to exercise elements of power public, whose State of origin will be responsible for the acts or omissions thereof. The obligations of the States are summarized in the following points: respect, protect, fulfill, render accounts and provide effective remedies.

The UN has recently developed the Guiding Principles on Business and Human Rights which are directed to States and businesses. The principles establish the obligation of the State to respect, protect and fulfill human rights and to fulfill this duty to the companies in its territory or jurisdiction, or under its ownership or control in third countries. On the other hand, it establishes the responsibility of companies to respect human rights and to prevent, mitigate or cope with the negative consequences that may occur.

The legislation that has been created in recent years, which invokes the responsibility of the States and companies in their foreign investments, is basically a struggle to defend human rights in the globalization process. It is important that states can take actions when they detect serious infringements of human rights and want to fix it, and it is reprehensible that these states provide funding opportunities for projects with noticeable impact on such rights. It has also meant an attempt to curb human rights violations that may occur in the countries under investments. In recent years there have been cases in which some solutions have been found, or in which land grabbing have been paralyzed, mainly due to social movements and the awareness of international organizations. There have also been created new guidelines, principles and statements defending human rights in these situations and establishing duties of states and companies. However, a real application of these standards is essential and also the adoption of the necessary measures in order for states and multinationals to respect human rights outside their country, and a real effective procedure of accountability measures in case of violations. Similarly, it is essential that States, non-state actors and society, are aware of the reality that thousands of people are living and that affects the whole world.